ERNESTO GANUZA JOAN FONT

¿POR QUÉ LA GENTE ODIA LA POLÍTICA?

CATARATA

ERNESTO GANUZA JOAN FONT

¿POR QUÉ LA GENTE ODIA LA POLÍTICA?

CATARATA

ERNESTO GANUZA

Es investigador del IESA (CSIC). Actualmente es el editor de la Revista Internacional de Sociología y forma parte del colectivo Antígona, procesos participativos. Entre sus publicaciones más recientes se encuentran Popular Democracy: the paradox of participation (con Gianpaolo Baiocchi) y El círculo virtuoso de la democracia (con Francisco Francés).

JOAN FONT FÀBREGAS

Es investigador del IESA (CSIC). Ha sido profesor en la UAB, director de investigación del CIS y director del IESA. Entre sus publicaciones se encuentran Ciudadanos y decisiones públicas, Cómo votamos en los referéndums (con Braulio Gómez) y Las encuestas de opinión (con Sara Pasadas del Amo).

Ernesto Ganuza y Joan Font Fàbregas

¿Por qué la gente odia la política?

CÓMO NOS GUSTARÍA QUE SE TOMARAN LAS DECISIONES POLÍTICAS

DISEÑO DE CUBIERTA: PSD

© ERNESTO GANUZA Y JOAN FONT FÀBREGAS, 2018

© LOS LIBROS DE LA CATARATA, 2018
FUENCARRAL, 70
28004 MADRID
TEL. 91 532 20 77
FAX. 91 532 43 34
WWW.CATARATA.ORG

¿POR QUÉ LA GENTE ODIA LA POLÍTICA?
CÓMO NOS GUSTARÍA QUE SE TOMARAN LAS DECISIONES POLÍTICAS

E-ISBN: 978-84-9097-488-9
ISBN: 978-84-9097-468-1
DEPÓSITO LEGAL: M-13.298-2018
IBIC: JP/JFF

ESTE LIBRO HA SIDO EDITADO PARA SER DISTRIBUIDO. LA INTENCIÓN DE LOS EDITORES ES QUE SEA UTILIZADO LO MÁS AMPLIAMENTE POSIBLE, QUE SEAN ADQUIRIDOS ORIGINALES PARA PERMITIR LA EDICIÓN DE OTROS NUEVOS Y QUE, DE REPRODUCIR PARTES, SE HAGA CONSTAR EL TÍTULO Y LA AUTORÍA.

INTRODUCCIÓN

En los últimos años hemos asistido a un momento convulso en la política española. La crisis económica, el ciclo de protestas iniciado el año 2011 y la emergencia de nuevos partidos políticos han marcado un periodo caracterizado por el sentimiento negativo de la ciudadanía hacia la política. El objetivo de este trabajo es contribuir a comprender mejor ese rechazo, desde la percepción que tiene la ciudadanía y desde las alternativas que esta imagina. El trabajo que presentamos a continuación no es único en su especie (Sánchez-Cuenca, 2014; Innerarity, 2015; Urquizu, 2016), sino que se suma a este esfuerzo por comprender mejor la situación actual, aportando una reflexión sobre la situación de la política desde la percepción que tiene de ella la ciudadanía.

El título hace honor a un libro publicado en el año 2007 por el politólogo británico Colin Hay (*Why we hate politics*), que se preguntaba por el significado que tenía el gran descontento de la gente por la política. El libro de Hay se ubica en una tradición crítica con la deriva más tecnocrática de los estudios sobre la democracia. Al igual que hicieran Fernández-Albertos (2012) o Sánchez-Cuenca (2014) en España, la idea puesta en liza por Hay vinculaba ese odio a un diseño institucional que vaciaba poco a poco de contenido político las decisiones estratégicas que afectan sustantivamente a la población.

El trabajo que presentamos tiene una novedad respecto a los trabajos previos realizados sobre esta problemática. No solo nos preguntamos “por

qué la gente odia la política", sino que también nos preguntamos si este descontento lleva a la ciudadanía a pensar alternativas políticas. En este sentido, el libro analiza los límites y las condiciones de posibilidad de la democracia representativa para la gente y hasta qué punto la ciudadanía piensa en (y justifica) derivas institucionales diferentes a la representación. ¿Este descontento significa que la ciudadanía quiere participar más? O, por el contrario, ¿la ciudadanía se inclina por fórmulas institucionales más tecnocráticas?

Nunca antes se había registrado tanta participación como ahora (Baiocchi y Ganuza, 2017), precisamente en el momento en el que los niveles de confianza política de la ciudadanía son más bajos que nunca. En este proceso, en el que se ha multiplicado la retórica participativa en la política, se ha visto que las administraciones iniciaban experiencias participativas una detrás de otra. Algo que ha ocurrido en medio mundo, incluida España (Font *et al.*, 2014). No es muy difícil adivinar que muchos representantes políticos abrazan la retórica participativa como solución *ad hoc* al momento de crisis política que experimentamos. La cuestión que los investigadores se preguntan ahora es si llegamos con ello a una nueva era política marcada por la participación o es simplemente una cortina de humo para lidiar con esta crisis política. La pregunta no es casual, porque la novedad de los recientes procesos participativos, frente a los viejos, descansa en una retórica envuelta en mensajes de democracia directa y relaciones políticas sin mediación. Criterios que indudablemente desafían la lógica representativa. Si los representantes políticos llenan su discurso con estos mensajes, pero, como han señalado muchas investigaciones recientes (Baiocchi y Ganuza, 2017), desarrollan experiencias poco rompedoras, casi es obligado preguntarse sobre el sentido que tiene este giro retórico, también, para la ciudadanía.

A menudo, en la ciencia política se ha pensado que las críticas a la representación bebían de "las promesas incumplidas" de una democracia incapaz de dar más participación a la gente (Bobbio, 1985). Sin embargo, se nos ocurre otra posibilidad, quizá menos romántica, pero igualmente eficaz, como es pensar que lo que quiere la gente es que los gobiernos funcionen. Y, claro, pueden funcionar mejor de muchas maneras diferentes, no necesariamente tiene que ser con más participación. Por eso, algunos ya se han preguntado si, en este contexto que hemos señalado, efectivamente quiere la gente participar. Algunos investigadores, en un estudio sobre la realidad política estadounidense (Hibbing y Theiss-Morse, 2002), afirmaron rotundamente que "no", que lo que quería la gente en realidad eran buenos gobiernos y estos los identificaba la ciudadanía más con la tecnocracia que con la participación. El presente libro ahonda en esta cuestión. ¿Odiar la política lleva a la gente a dibujar escenarios de gobiernos más tecnocráticos o más participativos? ¿O puede, simplemente, querer más o mejor representación?

LA INVESTIGACIÓN

Para comprender mejor la crisis política a la que hemos asistido estos últimos años y poder responder a estas preguntas, hemos realizado una investigación novedosa. Vamos a trabajar a partir de una investigación basada tanto en un método cualitativo como en uno cuantitativo. Por un lado, organizamos diez grupos de discusión, con lo que pretendíamos profundizar en los argumentos y las justificaciones que la gente utiliza para discutir la crisis política, así como las alternativas que es capaz de imaginar. Por otro lado, realizamos una encuesta específicamente diseñada para observar este problema desde la opinión pública y que nos permitiera analizar las preferencias que tiene la ciudadanía sobre los distintos procesos

políticos (democracia directa, tecnocracia y democracia representativa). En el apéndice metodológico detallamos la investigación realizada. Aunque utilizamos los datos más recientes disponibles que corresponden a Andalucía en el año 2015, tanto para los materiales cuantitativos como para los cualitativos contamos con información similar a nivel español[1], que muestra unas dinámicas extraordinariamente similares a las del caso andaluz.

EL LIBRO

El trabajo se divide en cinco capítulos más una introducción y unas conclusiones. Después de la introducción, en el primero hacemos un diagnóstico general de la situación política desde la perspectiva de la ciudadanía. Mediante datos de encuesta para España y Andalucía dibujamos el clima político existente y su evolución en los últimos años. A continuación (capítulo 2), analizamos los argumentos que se intercambian los participantes en los grupos de discusión al hablar sobre la crisis política. Aquí podremos reflexionar sobre el significado de la crisis desde la perspectiva de la ciudadanía, esto es, las razones por las que el sistema político ha entrado en crisis, según la gente. En el tercer capítulo abordamos los dilemas que plantea la participación como posible alternativa de gobierno. En diálogo abierto con los hallazgos cuantitativos del capítulo anterior sobre las preferencias de la gente respecto a un gobierno participativo, aquí expondremos las razones y los argumentos que emplean los participantes en los grupos de discusión con el objetivo de justificar sus preferencias sobre la participación. En el cuarto capítulo nos adentramos en el dilema de las preferencias de la gente por un gobierno tecnocrático. Empleando tanto la información que nos suministran los grupos de discusión como la encuesta, analizamos qué le gusta y qué no a la

ciudadanía de un posible Gobierno formado por expertos. Por último, acabamos haciendo una reflexión sobre las reformas políticas que la ciudadanía es capaz de imaginar.

AGRADECIMIENTOS

La investigación original de la que deriva este trabajo fue posible gracias a la financiación de la Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces en la IX Convocatoria de Proyectos de Investigación (2014, PRY079/14). Los dos autores principales de este trabajo, Ernesto Ganuza y Joan Font, presentaron un proyecto que fue finalmente seleccionado. No queríamos dejar de agradecer a la Fundación su trabajo y desempeño por favorecer la investigación.

El trabajo que presentamos a continuación es el esfuerzo de la reflexión conjunta de investigadores jóvenes y no tan jóvenes del Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA) del CSIC. Desde hace algunos años trabajamos en proyectos e ideas alrededor de la democracia y sus límites. Este trabajo hubiera sido imposible sin los jóvenes investigadores, a quienes debemos muchas reflexiones y el continuo desafío para seguir adelante. En especial, agradecemos el trabajo y las aportaciones de José Luis Fernández, Pau Alarcón, Carlos Rico y Patricia García-Espín.

Quisiéramos agradecer también el trabajo de otras muchas personas en el IESA. Hacemos especial hincapié en la Unidad Metodológica del IESA, que ha diseñado y coordinado todo el panel online que nos ha permitido contar con una encuesta especialmente diseñada para esta investigación: Sara Pasadas, Manuel Trujillo, Juan Antonio Domínguez, Rafi Sotomayor y Carmela Gutiérrez.

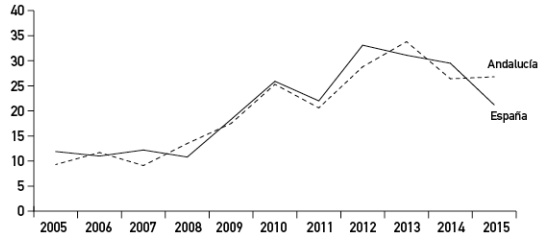
En el proceso de reflexión y trabajo sobre estas ideas hemos intercambiado discusiones con muchas otras personas. Sabiendo que nos olvidamos a mucha gente, no queremos dejar de mencionar a Laia Balcells,

Asa Bengtsson, Robert Fishman, María Jesús Funes, Claudia Landwher, Stefano di Marco, Mónica Méndez y Luis Ramiro. Gracias por vuestra ideas y debates.

CAPÍTULO 1
LA POLÍTICA COMO PROBLEMA

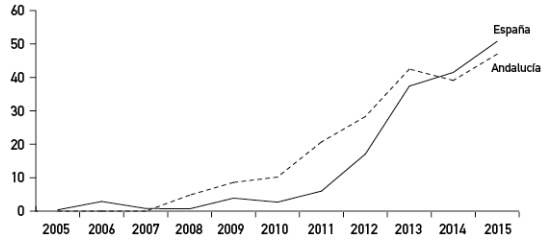
El grado de descontento ciudadano con la política se visualiza con mucha claridad si observamos hasta qué punto la ciudadanía entiende que la política y la corrupción son un problema. En los últimos años, ambas han pasado a ocupar las primeras posiciones en la lista de problemas mencionados por los encuestados[2]. Su evolución muestra pautas muy similares en Andalucía y el conjunto de España: la serie temporal señala que a partir de 2008 se dispara el porcentaje de encuestados que mencionan "la política" como uno de los tres principales problemas (del país o la comunidad autónoma). Así, de un 10,8% en España y un 13,5% en Andalucía en 2008 pasamos en solo dos años a un 25,9% y un 25,3%, respectivamente. En 2012 se produce otra gran subida; el dato llega al 33,1% a nivel nacional y al 28,8% a nivel andaluz. En lo que respecta a "la corrupción", vemos que a partir de 2008 se inicia una subida prácticamente ininterrumpida (42 puntos porcentuales en Andalucía y 50 en España, hasta 2015).

GRÁFICO 1
LA POLÍTICA COMO PROBLEMA



Fuente: Datos del EGOPA para Andalucía y del CIS para España.

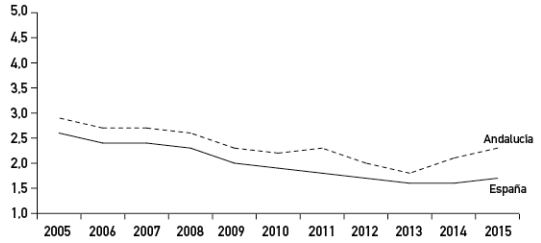
GRÁFICO 2
LA CORRUPCIÓN COMO PROBLEMA



Fuente: Datos del EGOPA para Andalucía y del CIS para España.

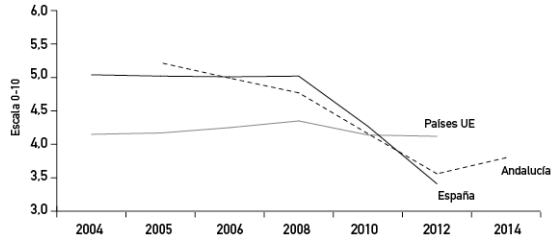
Como podemos ver, es a partir de 2008 cuando la política y la corrupción inician una carrera ascendente en las preocupaciones de la ciudadanía. Estos sentimientos negativos aparecen también en muchos otros indicadores. Por ejemplo, la "indignación" o la "desconfianza" a lo largo de los mismos años superan ampliamente otras actitudes más positivas como el "entusiasmo" o el compromiso "hacia la política". Los datos disponibles en las series históricas afirman una valoración muy negativa de la situación política tanto en Andalucía como en el conjunto de España, lo que se muestra en un declive lento pero continuado entre 2005 y 2013 (gráfico 3).

GRÁFICO 3
VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN POLÍTICA



Fuente: Datos del EGOPA para Andalucía y del CIS para España.

GRÁFICO 4
CONFIANZA EN EL PARLAMENTO



Fuente: Datos del EGOPA para Andalucía; del CIS para España y de la ESS para Europa.

El descontento se pone también de manifiesto al observar la evolución que experimenta la confianza que los ciudadanos tienen hacia las instituciones políticas, en concreto, hacia el Parlamento y el Gobierno. Este indicador muestra una caída pronunciada en la valoración de dos instituciones clave para la democracia representativa, tanto en Andalucía como en España. En el gráfico 4 se puede observar el descenso pronunciado de la confianza hacia el Parlamento durante estos años. Para dar cuenta del significado de este descenso, hemos puesto los datos de la confianza en el Parlamento para los países de la Unión Europea en el mismo periodo, obtenidos a partir de la European Social Survey. Como se puede observar, el contraste es notable: mientras en España y Andalucía disminuye esa confianza de forma pronunciada, la media de los países de la Unión Europea muestra mucha estabilidad en el tiempo, con medias de confianza bajas pero estables. Los datos para la confianza en el Gobierno son muy similares.

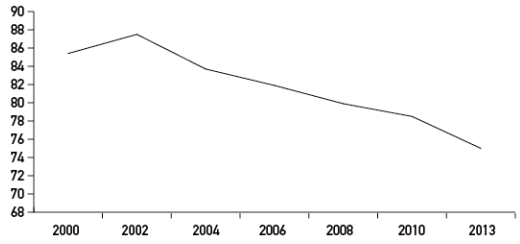
EL IMPACTO DEL DESCONTENTO. ¿CRISIS O MÁS DEMOCRACIA?

¿Qué significa este descontento? ¿Se puede hablar de crisis política? ¿Tiene el descontento un impacto directo sobre la legitimidad democrática? Si observamos lo que ocurre en relación con el grado de satisfacción con el funcionamiento de la democracia, vemos que los niveles de satisfacción se mantienen estables a lo largo del periodo 2005-2008 —en torno al 6 en España y al 5,2 en Andalucía, en una escala entre el 0 y el 10—, para iniciar un claro descenso a partir de 2008, hasta alcanzar en 2012 una media de 3,9 a nivel nacional y de 3,5 en Andalucía. Esto supone una reducción de la satisfacción superior al 30% en ambos territorios. A partir de 2012 se aprecia un ligero repunte de la valoración en la región andaluza, hasta llegar al 4,1 en 2015, lejos aún de los valores que encontrábamos al inicio del periodo analizado. En Europa, en contraste con la tendencia andaluza y española, la valoración media de los ciudadanos sobre el funcionamiento de la democracia en sus respectivos países se mantiene en torno al 5, sin oscilaciones significativas entre 2004 y 2012. El dato respecto a Europa no cuestiona realmente la relación esbozada, pues país por país se evidencia que los más castigados por la crisis económica (los países del Sur) son también los que peor valoran el funcionamiento de la democracia (Armingeon y Guthmann, 2014).

La satisfacción con el "funcionamiento de la democracia" se suele entender como el apoyo concreto que la ciudadanía otorga al sistema político. Pero en la ciencia política ese indicador es tan importante como el apoyo difuso que la ciudadanía otorga al sistema político. El primero suele ser un indicador asociado al bienestar individual de la ciudadanía: si todo va bien, la gente suele estar más satisfecha, por lo que es un dato que suele ser muy sensible a las crisis económicas como la que hemos experimentado en

España. El segundo, en cambio, suele informar sobre el apego de la ciudadanía a los valores democráticos. Su comportamiento habitual es además independiente del apoyo concreto que la gente da a la democracia; es decir, podemos no estar satisfechos con la democracia y, sin embargo, apoyar decididamente los valores democráticos. ¿Qué ocurre con el apoyo difuso a la democracia en este tiempo? Los datos nos revelan que esa fuerte insatisfacción con el funcionamiento de la democracia en los países del Sur europeo llega también a tener efectos (a nivel español) en el apoyo que esta recibe como forma de gobierno preferida (gráfico 5). El descenso ciertamente es menos acusado que respecto a la satisfacción con su funcionamiento (apenas disminuye un 10%), pero evidencia la posibilidad de contagio, como por otro lado ya habían anunciado investigaciones recientes a nivel europeo (Cordero y Simón, 2016; Magalhães, 2014). Aunque esta fuerte caída del apoyo incondicional a la democracia se da entre muy amplios sectores de la población, los datos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) muestran que es especialmente acentuada entre la población con menores niveles de estudios, colectivo en el que el apoyo difuso llega a desplomarse hasta el 56%.

GRÁFICO 5
LA DEMOCRACIA ES PREFERIBLE A CUALQUIER OTRA FORMA DE GOBIERNO (ESPAÑA)



Fuente: CIS.

Veamos entonces si este descontento con la política y esta disminución

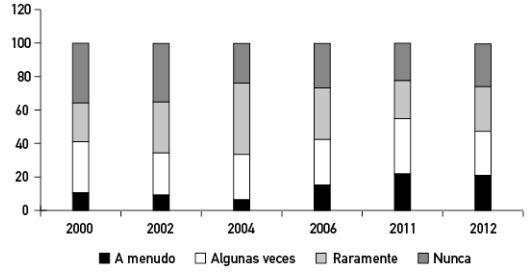
relativa del vínculo con los valores democráticos se traducen efectivamente en indiferencia hacia la política o, por el contrario, suponen un reclamo en términos de más democracia.

¿EL REGRESO DE LA POLÍTICA?

Para responder esta cuestión, los estudios existentes al respecto suelen subrayar la importancia de indicadores como el grado de interés por la política o la eficacia política interna (Magalhães, 2005; Torcal y Montero, 2006). El interés por la política es un indicador que se viene utilizando habitualmente en los estudios sobre la democracia como una aproximación al grado de implicación de la ciudadanía en el ámbito político, pues tiene la virtud de ofrecer una información privilegiada con la que valorar la predisposición de los individuos a relacionarse con el medio político. Podríamos esperar que dicho interés disminuyera en el tiempo estudiado, dado el descenso pronunciado del apoyo concreto a la democracia. Sin embargo, los datos de la última década, tanto en Andalucía como España, muestran lo contrario, un leve aumento del interés por los temas públicos. El incremento del interés es relativo (en una escala de 1 a 4, sube en Andalucía del 2,1 al 2,5 entre 2005 y 2015; mientras que para España aumenta del 2 al 2,2, en este caso entre 2004 y 2012), pero muestra una tendencia contraria al descenso del apoyo a la democracia. Esta tendencia se aprecia, además, en otros indicadores también muy reveladores, como el crecimiento de las conversaciones sobre política que reflejan las encuestas del CIS para el conjunto del país (gráfico 6). Este incremento es anterior incluso al estallido de la crisis, puesto que sus primeros indicios son ya de la primera legislatura de Rodríguez Zapatero en el año 2004. Esta misma tendencia se reproduce casi con absoluta exactitud si observamos la frecuencia con que se habla de política con familiares o entre amigos. En

los doce años que van de 2000 a 2012, los que hablan de política a menudo se doblan.

GRÁFICO 6
¿CON QUE FRECUENCIA DIRÍA USTED QUE HABLA O DISCUTE DE POLÍTICA?



Fuente: CIS.

La eficacia política interna, por otro lado, nos permite conocer el grado hasta el que una persona cree que puede influir en las decisiones políticas (Magalhães, 2005). Mediante la eficacia política se puede valorar hasta qué punto los ciudadanos se sienten sujetos políticamente activos, elemento crucial para poder hablar de su implicación en el devenir de las decisiones públicas y el grado de apertura del sistema político a sus demandas. Los datos existentes nos muestran que la gente que está de acuerdo con la frase "Generalmente, la política parece tan complicada que la gente como yo no puede entender lo que pasa" disminuye y terminan siendo más los ciudadanos que están en desacuerdo con esa afirmación. Así, del 39,5% de españoles en el año 2003 que no estaban de acuerdo con la idea de que la política era demasiado complicada para ellos, se pasó en el año 2014 al 50,5%. Esto sugiere un incremento de la eficacia política interna de la ciudadanía, mediante la cual muchos ciudadanos se pueden sentir capaces de tener un papel activo en política.

Los datos expuestos nos revelan un escenario marcado por una creciente tensión política. El progresivo y elevado descontento político hacia el

funcionamiento de la democracia no se ha terminado por traducir en indiferencia hacia la política. Muy al contrario, la ciudadanía está más interesada que nunca por la política y se percibe más que nunca como un actor políticamente capaz de intervenir en ella. ¿Significa esto que aumenta el apoyo a formas alternativas a la democracia representativa como planteábamos en la introducción? La participación política nos puede dar señales tan o más importantes que las actitudes declaradas sobre dónde se sitúa la ciudadanía frente a la vida política. En el mismo periodo analizado asistimos a un declive de las formas de participación convencionales, pero observamos un crecimiento de otras formas de participación basadas en una lógica de funcionamiento extraparlamentaria. Casi todos los indicadores disponibles a nivel español apuntan en una dirección similar, el enfriamiento de formas de participación *convencionales* (pertenencia a asociaciones, organizaciones políticas, etc.) y al mismo tiempo un considerable incremento de las llamadas *no convencionales* (como recogida de firmas, asistencia a manifestaciones o participación en huelgas). Vamos por eso a limitamos a reproducir dos ejemplos de esta tendencia: la asistencia a reuniones o mítines políticos y la participación en manifestaciones.

Si observamos lo sucedido con la primera forma de participación sugerida, durante la crisis económica, el porcentaje de entrevistados que dice haber participado en un pasado lejano se mantiene casi invariable, mientras que el de aquellos que participaron alguna vez en los últimos doce meses en alguna reunión o mitin político alcanza un mínimo histórico del 5,3%, según los datos proporcionados por el CIS. A su vez, los entrevistados que no han participado pero podrían hacerlo se sitúan en un 24,1%, frente al máximo del 33,3% en 2005, mientras que el número de entrevistados que dice no haber participado y que nunca lo haría alcanza su

pico en 2014, con un 48,8% de las respuestas. Por otro lado, vemos una tendencia muy diferente en la asistencia a manifestaciones. Las cifras oscilan entre un 11,9% y un 13% en el periodo que se inicia en el año 2006 hasta el año 2008, para elevarse hasta un 15,8% en 2011 y alcanzar un pico de máxima participación en el año 2013, con un 23%. Desde entonces, las cifras se moderan progresivamente hasta el 16,9% del año 2015, que sigue siendo una cifra superior a la que mostraban las encuestas antes del inicio de la crisis.

Los datos mostrados son un esbozo de los distintos indicadores que se pueden mostrar respecto al problema tratado. Otros muchos nos hubieran sugerido lo mismo. Solo hemos querido mostrar cómo en España y Andalucía durante la última década se ha producido un movimiento hasta cierto punto paradójico. Mientras la gente se aleja de la política oficial, parece mostrar comportamientos más politizados que nunca. Si nos detenemos a pensar lo que ha pasado respecto a Europa, antes del inicio de la actual crisis económica y política, Andalucía y España formaban parte de lo que podríamos llamar cierta normalidad político-cultural europea. Sin duda, había pautas que singularizaban a una y a otra en cuanto a cómo la ciudadanía se relacionaba con la vida política, pero no nos encontrábamos ante situaciones muy anómalas: el nivel de apoyo a la democracia o la confianza en el Gobierno y el Parlamento, por ejemplo, no llamaban la atención cuando los comparábamos con otros países europeos.

Desde la segunda mitad de la década anterior empiezan, sin embargo, a aparecer síntomas de cambio. La ciudadanía apunta a una creciente desconfianza respecto a la vida política: la política (y la corrupción como patología asociada a la misma) se convierte en problema en lugar de ser parte de la solución, la confianza en las instituciones cae hasta arrastrar a la propia confianza en la democracia como sistema y los sentimientos

negativos hacia la política prevalecen de forma abrumadora. Ese crecimiento de la desconfianza se complementa, sin embargo, con una tendencia contraria, pues una parte de la sociedad reacciona a ese descontento politizándose, incrementando su nivel de interés por la política, su eficacia política interna o su capacidad para verse como un sujeto político y, finalmente, aumentado su participación política por vías no convencionales.

Desde este punto de vista, si la gente odia la política, no parece que sea porque odie la democracia. No obstante, quedan respuestas sin aclarar. ¿Cuáles son entonces las razones para ese sentimiento de rechazo a la política? ¿Implican esas razones un diálogo sobre otras formas de gobernar? Si así fuera, ¿cuáles serían? ¿Qué elementos apoyarían esas alternativas? El resto del libro trata de responder estas preguntas.

CAPÍTULO 2

¿POR QUÉ ODIAMOS LA POLÍTICA?

Como hemos podido observar en el capítulo anterior, los sentimientos negativos hacia la política y el descontento con ella son algo ampliamente extendido. Pero nuestra idea era ir un poco más allá para poder descifrar mejor lo que piensa la gente y las previsibles consecuencias que esta actitud de rechazo pudiera tener sobre el sistema político. Los grupos de discusión son un complemento ideal para este cometido. Nos permiten plantear un debate entre ciudadanos, a partir del cual estos se ven impelidos a elaborar argumentos y justificar sus opiniones (Martín Criado, 1997). En este capítulo vamos a desarrollar los argumentos movilizados por los participantes en los grupos de discusión para hablar de esta crisis. ¿Por qué la ciudadanía tiene esos sentimientos de rechazo y descontento hacia la política? ¿Qué referencias tienen los ciudadanos al mostrar su descontento? ¿Qué significa, en definitiva, para ellos que la política sea un problema?

Los grupos de discusión iniciaron los debates siempre a partir de una pregunta general, que solicitaba a los participantes reflexionar sobre el estado de la política en el momento actual (ver apéndice metodológico). Los participantes comenzaban las dinámicas de debate, por lo general, exponiendo todos esos sentimientos negativos que aparecían en las encuestas de opinión pública. La política está "sucia", es "terrible", es "engañosa", etc. Pero ¿qué significa ese descontento? Mejor: ¿qué argumentos y justificaciones moviliza ese descontento entre los

ciudadanos? ¿Se trata solo de un descontento con los resultados económicos o incluye también un descontento con los principios de la democracia?

UN SISTEMA FALLIDO

En las dinámicas de discusión, al hablar del descontento, siempre aparece la figura del político, es decir, la figura de un gobernante que ha hecho mal su trabajo. La intensidad del descontento puede quizá verse a través de cómo muchos de los grupos llevan el debate más allá de los representantes elegidos en unas elecciones. Al hablar de la situación política actual, muchos participantes en los grupos pasan inmediatamente a describir un problema asociado al sistema político como tal, porque "el problema es el sistema" [gsc3], que es calificado como "fallido" [gp4], "incapaz de resolver los asuntos que preocupan" a la gente [gsc1; gsc5], un sistema político, en definitiva, "que no funciona" [gp3][3]. Esto ocurre de forma transversal en los grupos, independientemente de su procedencia social, económica o ideológica. Por tanto, la idea que los ciudadanos tienen sobre el mal gobierno tiene que ver para ellos con un problema sistémico, antes que con un problema causado únicamente por malos representantes.

Cuando los grupos de discusión pasan a continuación a describir el problema del sistema político, en la mayoría de los casos hablan de un "colapso". El sujeto responsable de ese colapso no son los representantes, sino los partidos. Ellos son los responsables del modo en que funciona la política. El problema del sistema político para la mayoría residirá aquí. Los partidos dominan la política y ellos son también los únicos que imponen las reglas, que suelen responder a su lógica de funcionamiento, una que la mayoría identifica a través de un entramado de relaciones basado en lealtades personales. Algunos grupos, como los militantes del Partido Popular, hablan de "partidocracia" [gp2] para caracterizar un escenario en el

que los políticos no han sabido, según ellos, responder a las necesidades de la ciudadanía. Pero ¿qué significan las relaciones de lealtad?

Un sistema político guiado por lealtades personales distorsiona, desde el punto de vista de la ciudadanía, lo que debería ser el objetivo de la política. Algunos participantes invocan el interés general como lo opuesto a lo que persigue un sistema político que, para ellos, funciona a partir del intercambio de favores. Es este intercambio el que facilita que lleguen al poder "los peores" políticos. Frente a este sistema, que muchos participantes describen como si estuviera basado en un código de conducta que se rige por la lealtad que se debe al partido o al jefe del partido, se antepone de forma difusa un escenario en el que los políticos deberían estar comprometidos con el bien común, al menos, con los problemas de la comunidad y no con los intereses ciegos de los partidos. Y eso solo lo podrían hacer "los mejores" políticos.

En medio de este debate, los simpatizantes del PP narran una fábula al respecto muy ilustrativa, que una de las participantes titula "el hormiguero": "Se trabaja para la reina y esta trabaja para mantener a la gente del partido, pero no se trabaja por el interés general" [gp2]. En la discusión que los participantes tienen en ese momento no se hace referencia a ningún partido en particular, sino al sistema de partidos. Este discurso es muy general entre los diferentes grupos de discusión, tanto a la derecha como a la izquierda del espectro ideológico, y por parte de todos los grupos de la sociedad civil. Lo vemos en la critica que los simpatizantes de Ciudadanos hacen "al exceso de instituciones", como las diputaciones o muchas áreas de gestión de las comunidades autónomas, cuya única razón de existencia sería para ellos la de ser "agencias de colocación" de la gente que está en los partidos, en lugar de ser centros reales de "gestión" a favor de la ciudadanía [gp3]. Los participantes en los grupos más vulnerables (trabajadores precarios,

jóvenes sin estudios) y los mayores comparten estos argumentos, porque para ellos también muchas de esas instituciones implican la presencia de políticos que básicamente se enriquecen y no desempeñan la labor para la que (idealmente) fueron elegidos [gsc2; gsc6]. Los profesionales liberales y empresarios lo traducen, en cambio, defendiendo el papel que debería tener el funcionario de carrera en la Administración, sustituido, según ellos, en los cargos de dirección de las instituciones públicas por personal de confianza política, que es calificado como "poco competente" [gsc1]. Los estudiantes universitarios señalan a los partidos como entidades egoístas, que "miran por su interés y no el de la sociedad" [gsc3]. El lenguaje de los estudiantes universitarios lo vemos también en los simpatizantes del PSOE, que insisten sobre todo en el "peligro de la profesionalización" de la política: "Hay personas que se han profesionalizado tanto en la política, eh. Y eso yo no lo veo bien, porque, voy a hablar con mucha sinceridad, en los partidos a veces, el mandamás está, como yo siempre digo, con dos cuchillos en la boca para el que se me adelante, fuera, ¿no?" [gp1]. El sistema de partidos actual es, para la mayoría, como vemos, una de las principales causas de los problemas que tiene la política.

El elemento principal que causa ese "hartazgo" del que hablábamos en el primer capítulo se deriva, entonces, de un sistema político vertebrado por relaciones de lealtad. Y el síntoma con el que casi todos los grupos hablarán de este problema es la profesionalización de la política. No vamos a encontrar grandes diferencias sobre este relato entre los grupos: 1) las relaciones de lealtad implican 2) la profesionalización de la política, lo que produce 3) mala gestión que 4) aboga a la desconfianza y descontento. Sean los viejos partidos o los nuevos, sean los grupos de la sociedad civil con más recursos o con menos, la profesionalización de la política es la principal razón del descontento político, como expresa esta simpatizante del

Partido Popular: “El problema del desencanto de la gente es porque nos hemos convertido en un Estado de partidocracia” [gp2]. Son las relaciones de lealtad las que alejan los partidos de los problemas de la ciudadanía, las que los hace incapaces de solucionar los problemas de la gente [gp4; gsc1]. Esto para muchos no es algo nuevo. La diferencia con otros periodos históricos es que ahora “se ha dicho ‘hasta aquí’” [gp3].

A pesar de que podamos considerar que con mayor o menor intensidad todos los grupos hablan de los fallos del sistema político de un modo similar, no sería cierto decir que el fallo del sistema, los partidos, ocupa la misma escala de importancia en los argumentos de unos y otros grupos. Por ejemplo, los grupos que argumentan de manera más diáfana que los problemas de la política proceden del sistema de partidos son los grupos de la sociedad civil con mayores recursos educativos (los trabajadores cualificados, los estudiantes universitarios, así como las asociaciones altermundistas). Entre los grupos políticos, son precisamente los nuevos (Ciudadanos y Podemos-IU) los que son más claros al apuntar un problema sistémico. Esto no quiere decir que los otros grupos sean benévolos con lo que pasa, pero encontraremos una perspectiva crítica distinta. Los grupos sociales más castigados, en nuestro caso representados por los trabajadores precarios, los jóvenes sin estudios y los mayores, son más radicales que los otros grupos. Su crítica a los partidos es devastadora, sin medida. La crisis económica, que constantemente llena los argumentos de sus posiciones ante la política, los lleva a considerar esta como acabada, como si se hubiera llegado a un final de trayecto. Mientras los otros grupos hablaban de crisis sistémica, estos hablan de su destrucción. En un lado se diagnostican los errores (que se podrán solucionar mejor o peor después), mientras que en el otro se da paso a otra cosa distinta a la que se tiene. Para los grupos más vulnerables, todos los políticos y, por ende, todos los partidos, son iguales:

“Yo creo que mucha gente no va a votar ya por… porque tiene ya eso metido en el coco: que sea quien sea va a robar igual. Unos más, otros menos” [gsc2]. Los mayores, en un momento de la conversación, empiezan a recordar casos de corrupción de los ochenta (Rumasa), de Felipe González, y los vinculan a lo que está pasando hoy, como si nada hubiera cambiado. “Los políticos”, dirá uno de los participantes en el grupo de jubilados, “son todos los mismos perros con distintos collares” [gsc6]. Por el otro lado, los participantes que apoyan a los partidos tradicionales (PP y PSOE) modulan más que nadie la crítica al funcionamiento actual de la política y, por ende, a los partidos. Ellos se concentran más en las malas artes de los líderes o en las malas virtudes de un sistema que sostiene malos líderes, por lo que siempre terminan por personificar el sistema en individuos concretos. Para estos habrá entonces cosas que mejorar, pero en sus debates no se sugiere nunca la refundación de una cosa distinta a lo que ya tenemos o su eliminación; suelen defender el sistema político aunque se apunten, como el resto de los grupos, a demandar la necesidad de cambios.

Si la crítica a los partidos encierra por lo general una evaluación muy negativa de su desempeño en la democracia, los matices que cada grupo introduce en su relato plantearán consecuencias distintas, en la medida en que el problema se enmarca en un contexto político distinto. Los simpatizantes de los partidos más conservadores (PP y Ciudadanos) y el grupo de los profesionales liberales, por ejemplo, mencionan con insistencia cómo los partidos han convertido el espacio existente entre los diferentes poderes del Estado en algo difuso, lo que suelen ejemplificar a partir de la impunidad judicial con la que los partidos afrontan sus problemas de corrupción: “El problema es que la justicia no funciona” [gsc2]. Para los simpatizantes de los partidos de la izquierda (PSOE y Podemos) y las asociaciones altermundistas, sin embargo, el desempeño negativo se plantea

en otro escenario, mucho más político, que tiene que ver con el alejamiento, provocado por los partidos, entre los representantes y la ciudadanía. Los grupos más vulnerables se encontrarían por lo general más cerca de las posiciones progresistas, aunque de una manera más radical.

Como vemos, la manera de enfocar las consecuencias democráticas que genera el sistema de partidos se bifurca. Por un lado, se trata del mal uso de las instituciones provocado por el dominio de los partidos, que no tendrían contrapoder alguno que los limitara. Esto permitiría a los partidos, por ejemplo, controlar el sistema judicial para poder, según los participantes en esos grupos, librar su batalla contra la justicia, por los casos de corrupción, de manera exitosa. Aquí encontramos el reclamo a una separación de poderes que habría sido ninguneada por los partidos. Por el otro lado, se menciona el aislamiento de la institución política respecto a la sociedad civil, con un dominio de los partidos políticos que se encontrarían igualmente sin contrapoder alguno, lo que permitiría a los partidos estar fuera del control social. Una participante del Partido Socialista hablaba de que "los gobiernos han estado sordos" [gp1], mientras los participantes de Podemos e IU mencionaban "la falta de cauces de representación" [gp4]. Aquí no se menciona tanto la separación de poderes como la usurpación de la soberanía por parte de los partidos o lo que para los grupos más vulnerables sería el olvido por completo de las condiciones de vida de la ciudadanía por parte del sistema político. Ambas posturas reflejan una orientación distinta hacia la política y será lo que estructure los debates que tienen los participantes en torno a la política y las alternativas posibles. Pero ¿hacia dónde van los cambios? ¿Qué tipo de cambios políticos se imaginan?

ÉPOCA DE CAMBIOS. DE LA CRISIS DEL SISTEMA A LA REFORMA

Las encuestas de opinión pública que vimos en el capítulo anterior hablaban de un incremento de la capacidad con la que se perciben los ciudadanos para intervenir en política, precisamente en un momento en el que las críticas al sistema político son, como acabamos de ver, más explícitas que nunca. ¿Cómo se articula esto con la crítica al sistema político? ¿Se piensa en una alternativa al sistema?

Aquí, todos los grupos aluden a los nuevos partidos (Podemos y Ciudadanos) como el emblema que certifica que los tiempos han cambiado, que la política, en definitiva, se ha abierto y ha cambiado. Ya no hay tantas referencias al movimiento de protesta iniciado en 2011, salvo para acreditar su impacto a través del nacimiento de los dos nuevos partidos. Son ellos los que ofrecen al resto un nuevo suelo desde el que pensar el problema de la política. Lo que resulta revelador para nosotros es cómo ambos partidos son percibidos por el resto de los grupos. Para muchos grupos de la sociedad civil, el descontento político fue el que provocó el encantamiento con la nueva política, entiéndase los nuevos partidos [gsc1]. En un sentido muy similar se expresan los simpatizantes de los partidos tradicionales, para quienes los nuevos partidos no dejan de ser producto del sistema fallido y un espejo en el que los viejos partidos podrían mirarse para transformarse [gp1, gp2]. Pero más que abrazar la nueva política o de dar la bienvenida a un nuevo tiempo, hay en sus argumentaciones una especie de justificación negativa de los nuevos partidos, como si su aparición hubiera sido demérito de las antiguas estructuras, antes que el mérito y, por tanto, el éxito de un proceso evolutivo positivo. La consecuencia que tiene entre la ciudadanía esta percepción, un tanto distante hacia los nuevos partidos, es la de relativizar el impacto de los mismos o, al menos, los aires de la nueva política, aunque sea su aparición la que ayude a muchos participantes en los grupos a pensar un suelo diferente desde el que valorar el hartazgo con la

política. Lo que anteriormente podía ser vivido con indiferencia, los nuevos partidos parece que lo hubieran transformado en una actitud de búsqueda de alternativas, como si con ellos fuera posible pensar que la política puede abrirse hacia fuera. Por supuesto, son precisamente los simpatizantes de estos dos nuevos partidos los que más hablan de estos cambios en las dinámicas grupales y los que le otorgan una mayor centralidad en sus respectivos relatos sobre la política. Para ellos, incluso la gente está cambiando, "hemos aprendido a ser críticos… nos han obligado" [gp3], lo que despierta cierta "ilusión" de que las cosas cambien [gp4].

Los matices con los que la ciudadanía habla de los nuevos partidos, no tanto como heraldos de una nueva época sino como hijos de un sistema en crisis, parecen enmarcar y orientar los discursos sobre las posibilidades del cambio político. Si el "hartazgo" con el que se observa esta época demandaba para todos un cambio real en las prácticas, este cambio estará, para la mayoría, lejos de una transformación integral del sistema político. Lo que parecía una revuelta sin paliativos frente a un sistema fallido se convierte, progresivamente, en el discurso de los grupos, en cambios concretos que hagan funcionar mejor el sistema. Por eso, al empezar a hablar de soluciones, se matiza el sentido de la crisis. "No hay desafección, sino descontento" [gsc1], dirán los profesionales liberales al valorar los cambios políticos. En el otro extremo, incluso los simpatizantes de Podemos e IU lo expresan así: "No hay disgusto por el sistema, sino por los representantes" [gp4]. Los simpatizantes de los partidos tradicionales (PSOE y PP) abogarán insistentemente por un cambio, aunque este, a pesar de su crítica a la profesionalización de la política, entienden que debe darse dentro del perímetro del sistema actual. Solo los grupos más vulnerables (los trabajadores precarios y los jóvenes sin estudios) y los mayores llevan este hartazgo a cierta indiferencia, "todos son iguales" [gsc6], como si no

hubiera apenas esperanza. Pero resulta algo paradójico que una vez se ha planteado la crítica mordaz contra los partidos y el sistema que ellos alimentan, los propios protagonistas de esa crítica parecieran relativizar sus argumentos en su objetivo de buscar soluciones. ¿Por qué se produce este giro?

En el momento en el que casi todos los grupos de discusión empiezan a valorar los posibles cambios del sistema político que han criticado severamente, la argumentación experimenta un giro que será determinante en el resto de los debates que tengan sobre el sistema político. El problema o, mejor, el dilema con el que se enfrentan es que es en este momento cuando todos empiezan a tener presente que el hecho de elegir a los "peores" se debe también a una elección ciudadana. Se produce así el desplazamiento de lo que era un problema generado por los partidos a uno derivado también de la sociedad. El problema de la política va a adquirir otro matiz, considerando lo que para muchos es el principio básico de la democracia representativa (los políticos son elegidos por la ciudadanía), por lo que los participantes en los grupos de discusión no van a dejar de preguntarse a este respecto: ¿por qué se elige a políticos considerados poco preparados? ¿Es suficiente justificar el problema con el mal hacer de los partidos o el sistema político? Las respuestas a estas cuestiones abren un problema diferente para casi todos, desde el cual también se va a entender el odio de la gente a la política de otra manera. A partir de aquí, no se trata solo de que el sistema político sea fallido, sino de que "nosotros" elegimos a los ("malos") representantes.

La marcada indignación que muestra la mayoría de los grupos contra la política abre así otro dilema al tratar de analizar cómo se ha llegado a tal situación. La respuesta a esta cuestión va a modular la percepción de los participantes sobre las posibles soluciones prácticas. El principal esquema

argumentativo será entonces que si la corrupción es un problema a causa de las relaciones de lealtad que tienen los políticos dentro de los partidos, se debe en parte a la sociedad, "a como son los españoles", que son quienes los eligen. De este modo, la corrupción, la partidocracia y los malos gobernantes, que insistentemente dotaban de contenido el descontento político, se diluyen para la mayoría de los grupos en un problema de índole ético, que afecta ya por igual a políticos y ciudadanos. Son, sobre todo, los grupos de la sociedad civil los que trasladan el problema de los políticos a una cuestión de carácter social. Aquí encontraremos tres líneas argumentativas diferentes. Por un lado, la mayoría de los grupos de la sociedad civil, más los simpatizantes de Ciudadanos, vincularán el problema de la corrupción y los malos gobernantes a una "forma de ser" española. Por otro lado, los grupos políticos tradicionales (PSOE y PP), que son los que se posicionarían más lejos de esta socialización del problema entre la ciudadanía, centrarán más sus críticas sobre las relaciones de lealtad en los partidos. Y, por último, estarán los grupos de izquierda (Podemos e IU y las asociaciones altermundistas), que vinculan esa "forma de ser" a un proceso de dominación institucional, no a un carácter inevitable de "ser español", que puede por eso cambiar mediante la política, otros gobernantes y otras instituciones. Las tres líneas marcan tres formas distintas de enfocar el descontento político y la posible mejora de la situación política actual considerando ya un problema que es tanto político como social.

Para la mayoría de los grupos de la sociedad civil esto significa que el problema de la política se traduce al final en una cuestión que tiene que ver con la "educación" de la ciudadanía. Tanto los grupos con más recursos ("no hablamos de políticos, la culpa es de cómo somos notros" [gsc1]; "los partidos son el reflejo de cómo somos los españoles" [gsc3]) como los que tienen menos recursos ("el sistema lo mantenemos todos, esto no funciona

solo" [gsc2]) vinculan el problema a una forma de ser, cuya solución ideal pasaría por un cambio educativo. "En España todos tenemos un precio", dirán los trabajadores cualificados [gsc1], mientras los jóvenes universitarios hablan de piratas: "En España nos educan en la corrupción, en ser piratas" [gsc3]. En el grupo de los trabajadores precarios, uno de los participantes se pregunta incluso retóricamente, al imaginar la situación en la que se encontrarían muchos de los políticos corruptos, "¿robaríamos nosotros?", a lo cual responde con una referencia genérica sobre la conducta humana: "Todos somos ladrones, es que somos personas". El problema de la corrupción, y, en general, la crítica mordaz que se hacía al sistema político, consecuentemente es relativizado. "Los partidos políticos son el reflejo de lo que somos los españoles", concluirán los estudiantes universitarios [gsc3].

El discurso ofrece un aire de inevitabilidad y sirve a su vez para construir un relato sobre el Sur (frente a un Norte europeo más civilizado) apoyado en estereotipos (como la referencia picaresca del grupo de trabajadores cualificados: "Todos llevamos un Lazarillo de Tormes dentro"). No es extraño que muchos grupos de la sociedad civil perciban entonces el sistema político indiferenciado ("los partidos políticos no se distinguen" [gsc2; gsc3]). Desde esta perspectiva, la tarea destinada a enmendar la política se vuelve titánica, se trata de educar bien a la ciudadanía. Los cambios invocados por estos grupos estarán, entonces, destinados a neutralizar la posibilidad de que salgan los "malos" políticos, como si una vez detectado el problema se pudiera poner solución mediante correctivos al carácter. La pregunta a la que se trata de responder sería algo así como ¿qué medidas favorecerían que los mejores políticos salieran elegidos? Las alternativas serán proyectadas siempre dentro del sistema político actual, como atestigua uno de los participantes en el grupo de Ciudadanos: "Es

cierto que yo creo que ha llegado el momento de hacer una reforma profunda, no una revolución, sino ver lo que no funciona e ir reformando" [gp3].

Los partidos tradicionales no llevan el problema de la política a un escenario ético como los grupos anteriores. Los participantes comparten el diagnóstico sobre las malas prácticas de los políticos y los partidos, pero en ambos grupos el problema se circunscribe al perímetro de estos. Entienden que el sistema puede mejorar incorporando nuevos procedimientos en política que atajen la profesionalización de la política o, al menos, le pongan coto. En esta línea, ellos orientarán sus conversaciones a mejorar lo que ya hay, mediante nuevos mecanismos que puedan neutralizar esa deriva cancerígena de la política: su profesionalización.

Por último, los participantes ideológicamente más de izquierdas (Podemos e IU y asociaciones altermundistas) comparten el problema de la educación de los primeros, pero aquí se habla de educación política antes que cívica. El problema entonces son las instituciones y cómo estas organizan los espacios políticos, no tanto una forma atávica de ser español. El actual sistema no dejaría lugar para la "implicación ciudadana" [gp4], desconecta la sociedad civil de la política. El problema de la representación se debe a cómo se ha institucionalizado el voto cada cuatro años, que ha hecho que la representación "se haya desvirtuado muchísimo" [gp4]. Los malos gobernantes se deberían en parte al diseño de las instituciones políticas, no tanto a las personas que están en los partidos, ni por supuesto a unos ciudadanos que pudiéramos considerar alienados: "Hemos llegado a la profesionalización de la política y es el chollo de la vida. Tú entras en el PP o en el PSOE, coges un puesto y tienes la vida solucionada… eso es lo que hemos construido, pero claro, porque la institución lo permite como tal" [gp4]. En todo caso, estos grupos, como todos los demás, tampoco se sitúan

más allá del sistema representativo, sino que buscan mecanismos que sean capaces de regular las relaciones políticas de otra manera dentro de la representación.

Como vemos, las dinámicas grupales dibujan un escenario muy semejante al de las encuestas de opinión. Pero lo que hemos podido ver es que la crítica mordaz al sistema político adquiere notoriedad cuando los participantes identifican los mecanismos que hacen que funcione mal la política: las relaciones de lealtad. Tras esta crítica hay una inclinación generalizada a abrir la política y un sistema que se nutre básicamente solo de los partidos. Todos se enfocan o creen ver en la profesionalización de la política el mecanismo causante de los malos resultados. Y todos los grupos, incluso los más vulnerables, aunque con intensidad y resultado diferente, dialogarán a partir de aquí sobre las posibles mejoras del sistema político. Tratan de discutir sobre qué procedimientos, instrumentos o reglas pueden facilitar el que tengamos mejores políticos, que para la mayoría significa abrir la política o substraerla de su ensimismamiento en el seno de los partidos. Esta idea es la que va a hacer que esté muy presente la tensión entre los procedimientos o los cambios más adecuados para que en lugar de los peores políticos sean los mejores los que lleguen al gobierno. En los siguientes apartados vamos a detallar este imaginario político, hacia dónde efectivamente se dirigen las preferencias que tiene la ciudadanía sobre los procesos políticos. Pero antes de abordar esta cuestión resultará ilustrativo compartir de qué modo la ciudadanía observa el sistema político en general. Si efectivamente se desea abrir el sistema político, ¿qué piensa la gente sobre la participación de la ciudadanía en los gobiernos?

¿QUÉ SE QUIERE CAMBIAR EN LA POLÍTICA?

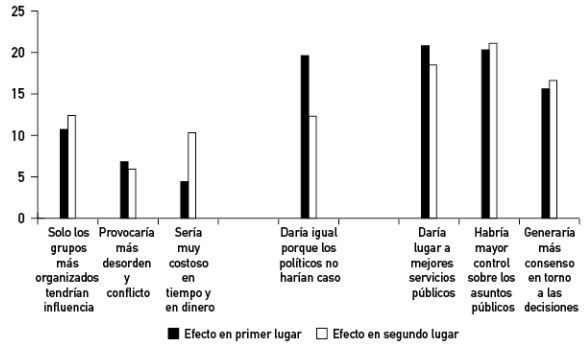
A estas alturas ya podemos preguntarnos qué significa para la gente la

apertura del sistema político. No es un problema liviano. ¿Tiene que participar la gente en el gobierno? ¿De qué manera tiene que participar, si es que lo tiene que hacer? ¿Es mejor que solo gobiernen los mejores? Habitualmente, la apertura de los sistemas políticos se ha medido por la capacidad que la gente ha tenido de participar directamente en las tareas de los gobiernos. Cuanto más restringido sea el acceso a los centros de decisión, menos abierto será el sistema político en cuestión. Imaginemos una monarquía en la que solo tienen acceso unos poquitos, frente a una democracia asamblearia, en la que tendrían acceso muchos. Entre medias, por supuesto, hay muchos matices y estancias intermedias. De una manera sencilla, pero un poco simplificadora, podríamos decir que cuanta más gente participe más abierto es un sistema político. Este es un dilema milenario que ha estado presente cada vez que históricamente se ha pensado una reforma del sistema político. Por ejemplo, la democracia como sistema político moderno, a raíz de la Revolución francesa y la estadounidense del siglo XVIII, nace contra la idea de una participación popular, a imagen de las asambleas y gobiernos populares de la Grecia clásica (Manin, 1998). Pero tampoco se pensó como una monarquía. Uno de los grandes politólogos contemporáneos, Noberto Bobbio (1985), hablaba siempre de "las promesas incumplidas" de la democracia moderna, porque su instauración se nutría de un sistema que había heredado el imaginario político de la democracia griega (participación popular y asambleas), pero había instaurado una democracia representativa que imponía unas restricciones notables a la participación. La tensión entre participación y representación forma parte de un problema complejo que, como acabamos de ver más arriba, está presente en los debates que la gente tiene sobre la política. ¿Si los partidos "envenenan" la política, significa esto que la gente está abierta a que la ciudadanía participe directamente en los gobiernos?

Dado que al final, en los debates que tienen los participantes en los grupos de discusión, hay una socialización del problema que causa el mal en la política, que deja de ser propio de los políticos para ser algo propio de la sociedad, nos podríamos preguntar si la ciudadanía quiere procesos más participativos. La cuestión que nos planteamos entonces es si se piensa efectivamente en la participación como un elemento necesario del cambio político, de la apertura del sistema político. Para ello vamos a ver lo que piensa la gente a través de la encuesta que realizamos en Andalucía.

En la encuesta preguntábamos por los efectos que la participación podría tener sobre diferentes aspectos en el sistema político. El resultado es claro. La ciudadanía se inclina por destacar más los efectos positivos. El cuestionario recogía tres aspectos positivos y tres aspectos negativos, y un efecto que no puede asociarse directamente a la participación, sino a la falta de respuesta por parte de las autoridades políticas. Según los entrevistados, el balance de una mayor participación sería, con diferencia, positivo. El 56,6% de la muestra eligió como principal efecto alguno de los tres positivos, mientras que solo el 21,9% eligió algún efecto negativo. Si a este porcentaje negativo le añadimos los que eligieron que los políticos no harían caso al resultado de los procesos participativos, la cifra escalaría hasta el 42%, aún por debajo de los efectos positivos.

GRÁFICO 7
LOS EFECTOS DE LA PARTICIPACIÓN



Fuente: PACIS (IESA/CSIC).

Estos datos hay que valorarlos con cautela, pues solo se ha preguntado sobre los efectos de la participación, no acerca del lugar que podría ocupar aquella en un sistema político, ni mucho menos si se prefiere a cualquier otra forma de gestionar los servicios públicos. No obstante, el dato confirmaría que la participación no es una herramienta impropia o estéril desde el punto de vista de la gobernabilidad. Veamos entonces qué piensa la ciudadanía sobre el papel que debería desempeñar la participación en un supuesto gobierno.

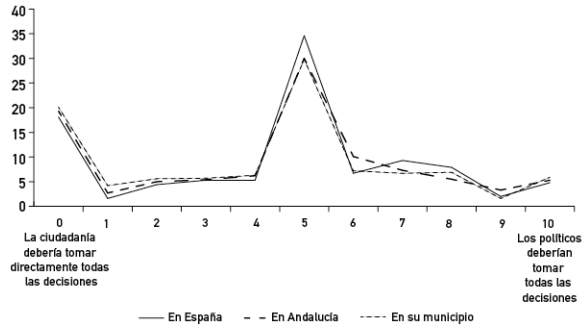
PARTICIPACIÓN FRENTE A REPRESENTACIÓN

Uno de los principales debates en torno a las preferencias de la ciudadanía sobre los diferentes modelos de toma de decisiones políticas pasa, sin duda alguna, por confrontar representación y participación. En nuestro análisis hemos considerado tres encuestas diferentes, aplicadas en ámbitos territoriales distintos, pero que tienen preguntas similares sobre nuestro problema: una encuesta a nivel nacional realizada en el año 2011; una encuesta municipal poselectoral realizada en Córdoba en el año 2011 por el IESA; y, finalmente, la encuesta realizada en Andalucía, también por el IESA, para este proyecto en el año 2015.

La principal lectura de esta pregunta (gráfico 8) es que los ciudadanos prefieren que las decisiones políticas en España se tomen de manera equilibrada entre la ciudadanía y los representantes políticos, aunque con una ligera inclinación hacia el lado participativo (las medias en todos estos estudios se sitúan alrededor del 4,6 en una escala de 0 a 10). Este predominio del lado participativo es especialmente intenso en la encuesta de 2015, donde aquellos que se colocan en el extremo (valor 0) llegan al 18% (10% en las encuestas de 2011). De cualquier manera, lo que

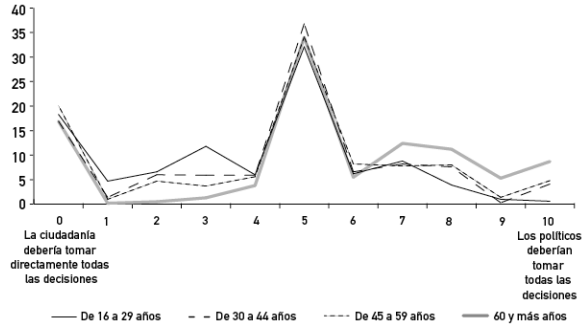
podríamos decir es que la ciudadanía en su conjunto prefiere procesos políticos equilibrados. Es interesante ver como ante una pregunta que implica concebir el sistema político como si fuera un juego de suma cero (los encuestados deben posicionarse en una escala en la que más participación supone menos representación o a la inversa), el resultado es un escenario mixto. No se renuncia a la representación, pero tampoco a la participación.

GRÁFICO 8
ESCALA DE PROCESOS POLÍTICOS



Fuente: España (CIS), Andalucía (PACIS-IESA), Córdoba (IESA).

GRÁFICO 9
ESCALA DE PROCESOS POLÍTICOS POR EDAD



Fuente: PACIS (IESA/CSIC).

Las mayores diferencias que encontramos a la hora de posicionarse en esta escala las encontramos respecto al factor generacional, como ya había

sugerido Urquizu (2016) en su análisis sobre la crisis de la representación en España. Como se observa en el gráfico 9, solo relativo a la población andaluza, no existen grandes diferencias entre aquellos que tienen 30 y 59 años. En cambio, se aprecian dinámicas actitudinales exactamente opuestas si comparamos el grupo de los más jóvenes con el de los más mayores en los extremos de la escala (0-3 y 7-10): aquellos con una edad comprendida entre los 18 y 29 años se inclinan por procesos de toma de decisiones en los que la ciudadanía tenga mayor influencia que los políticos, al contrario que aquellos que tienen más de 60 años.

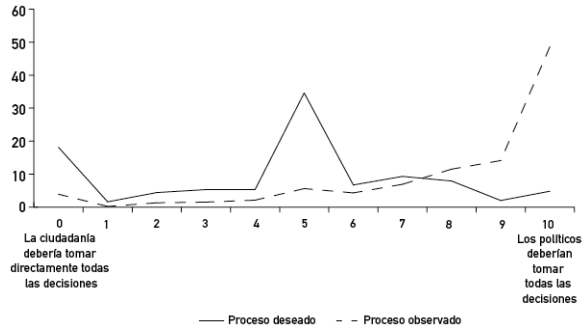
LA DEMANDA DE UN SISTEMA MÁS PARTICIPATIVO QUE EL ACTUAL

¿Qué pasa si comparamos las preferencias que tienen los ciudadanos por un modelo u otro de toma de decisiones y lo que ellos perciben que ocurre en el sistema vigente? Es decir, ¿cómo es de grande la distancia entre la realidad percibida y la deseada? El gráfico 10 (que refleja los datos andaluces de 2015, similares a los existentes en las otras encuestas) muestra que existe una fuerte disparidad. Tal y como veíamos antes, en general se prefiere un sistema donde tanto la ciudadanía como los políticos tomen las decisiones (media de 4,6). En contraste a este ideal, la ciudadanía percibe que actualmente en España el sistema de toma de decisiones está muy inclinado hacia el lado representativo (media de 8,2). En otras palabras, la gran mayoría de la población preferiría un sistema más participativo que el actual.

¿Hasta qué punto las preferencias de los ciudadanos se ven condicionadas por la escala del territorio del gobierno? Es decir, ¿se es más participativo a escala local que a escala estatal? La ciencia política ha tratado ampliamente este tema. Habitualmente se ha pensado que la

participación sería más fácil en ámbitos geográficos pequeños, que no tuvieran sistemas muy complejos, como las ciudades-Estado antiguas. No resulta extraño desde este punto de vista que la mayoría de las experiencias participativas hoy día se implementen a escala local. Sin embargo, los datos (tanto andaluces como españoles) apuntan a que la ciudadanía percibe diferencias muy pequeñas, aunque sí en el sentido esperado (se prefieren procesos más participativos a nivel local y menos participativos a nivel estatal).

GRÁFICO 10
PREFERENCIAS SOBRE EL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES Y PERCEPCIÓN DE CÓMO SE TOMAN ACTUALMENTE LAS DECISIONES EN ESPAÑA



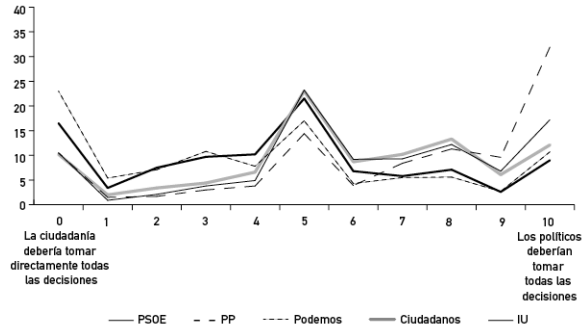
Fuente: PACIS (IESA/CSIC).

Estos resultados nos muestran que las críticas que los participantes en los grupos de discusión hacían al sistema político, aislado y encerrado, podrían plantear una mayor apertura de los procesos de toma de decisiones. Lo que por otra parte sugerían las encuestas sobre la opinión pública vistas en la introducción, donde la ciudadanía se percibía más que nunca preparada para adoptar un rol más activo en la política. Los resultados, no obstante, están lejos de afirmar un vuelco participativo de la población en detrimento de un modelo de toma de decisiones más representativo.

Como hemos visto ya en el primer capítulo, el descontento político ha ido creciendo a medida que avanzaba el siglo XXI. En ese contexto, el

movimiento 15M irrumpió en la escena con un mensaje crítico con los gobernantes: “No nos representan”. Las demandas de mayor participación por parte de un sector de la ciudadanía entroncaban, por tanto, con un descrédito de los partidos y demás instituciones políticas. Actualmente, la transformación del sistema de partidos abre el interrogante de hasta qué punto las nuevas opciones políticas están dando respuesta a estas demandas de mayor participación. Cabría preguntarse, por tanto, si todos los partidos políticos son percibidos de igual manera. El gráfico 11 muestra que en cuanto a la forma de tomar decisiones que defienden no lo son: los partidos percibidos como menos participativos serían el PP (media de 6,8), el PSOE (6,0) y Ciudadanos (5,7), frente a IU (4,5) y Podemos (4,1), que mostrarían un perfil algo más favorable a la participación.

GRÁFICO 11
PERCEPCIÓN DE LA FORMA DE TOMAR DECISIONES QUE DEFIENDEN LOS PRINCIPALES PARTIDOS

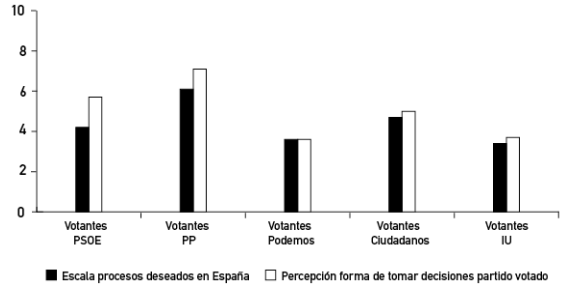


Fuente: PACIS (IESA/CSIC).

Ahora bien, el gráfico anterior muestra cómo la ciudadanía en general percibe a los diferentes partidos, pero no cómo se perciben en función de las preferencias partidistas. En otras palabras, ¿los votantes de cada partido defienden un modelo de toma de decisiones similar al que atribuyen a sus respectivos partidos? Como se observa en el gráfico 12, hay diferencias importantes entre qué sistema de toma de decisiones se prefiere según las

preferencias partidistas y qué sistema defiende el partido votado. En general, hay una correspondencia entre preferir un sistema más o menos participativo y votar a un partido acorde con ello (por ejemplo, quienes votan al PP, el partido menos proclive a la participación, son quienes prefieren un sistema menos participativo).

GRÁFICO 12
PREFERENCIAS SOBRE EL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES EN ESPAÑA SEGÚN EL VOTO Y PERCEPCIÓN DE LA FORMA DE TOMAR DECISIONES QUE DEFIENDE EL PARTIDO VOTADO (ELECCIONES ANDALUZAS, 2015)



Fuente: PACIS (IESA/CSIC).

Las encuestas parecen mostrar un marco de respuesta a la crisis política que reforzaría la opción participativa, con diferencias, claro, según la ideología. En línea con los argumentos que los participantes intercambian en los grupos de discusión, parece que la participación es una buena opción para abrir el sistema político. Pero esto no implica, como vimos, que se haga una apuesta por un gobierno puramente participativo. Cualquiera que sea el gobierno imaginado, la ciudadanía parece inclinarse por un modelo mixto. ¿Qué significa entonces aquí la participación?

CAPÍTULO 3

LOS DILEMAS DE LA PARTICIPACIÓN COMO ALTERNATIVA: ¿ESCUCHAR, OPINAR O DECIDIR?

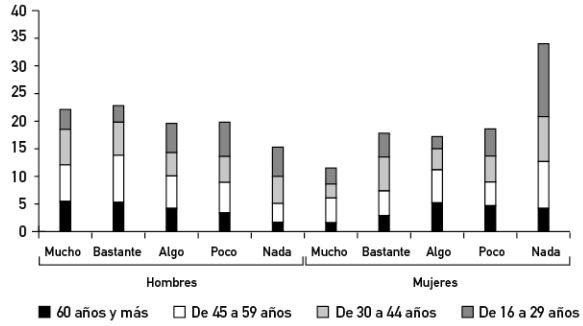
En el capítulo anterior hemos visto que la mayoría de la población piensa que se participa menos de lo que a ella le gustaría, pero también que esta apuesta no es radical. Esta modulación del discurso participativo la podemos comprobar a través de una nueva cuestión en nuestra encuesta, lo que va a añadir al problema un poco más de confusión.

En la encuesta quisimos saber el interés que podría suscitar una iniciativa participativa concreta impulsada por el Parlamento andaluz. La iniciativa es completamente imaginaria, pero su planteamiento es muy verosímil con las prácticas que se hacen hoy día alrededor de la participación. Concretamente, preguntamos: "¿En qué medida estaría Ud. interesado en participar en una reunión de un día completo en la que los participantes pudieran discutir una decisión política concreta con diputados del Parlamento andaluz? Participar no le conllevaría ningún tipo de gasto". Los resultados nos muestran que la ciudadanía rechazaría mayoritariamente la invitación.

Como se observa en el gráfico 13, la iniciativa despierta solo un moderado entusiasmo. El 37,1% afirmó que participar en esa reunión le interesaría mucho o bastante, frente al 44,1% que afirmó que poco o nada. La pregunta nos ofrece una información que hace un poco más compleja la cuestión del significado que tiene para la ciudadanía su inclinación por abrir el sistema político. Si recordamos que la mayoría de la gente pensaba que la

participación tiene efectos positivos, que además se decía que tanto el Gobierno como los partidos ofrecían políticas menos participativas de las que en general ellos desearían, ¿cómo podemos entender este rechazo a participar?

GRÁFICO 13
¿ESTARÍA INTERESADO EN PARTICIPAR?



Fuente: PACIS (IESA/CSIC).

La participación podría, en este sentido, plantearse como una crítica poco fundada por parte de la ciudadanía. Al fin y al cabo, la participación demanda muchos recursos personales de la ciudadanía, sobre todo, tiempo, por lo que a la hora de concretar ese horizonte ideal que se dibuja, el pragmatismo podría apoderarse de los ciudadanos. También podemos pensar que los ciudadanos reciben muchas invitaciones a participar o implicarse en eventos organizados por las administraciones, de los que nunca se obtiene un resultado satisfactorio. En los grupos de discusión, los participantes altermundistas hablaban mucho sobre este problema. Consideraban que la participación que se hacía era "aburrida" y, en muchos casos, ellos ni se planteaban participar. Por tanto, el rechazo a nuestra invitación podría también mostrar la incredulidad de la ciudadanía. Cualquiera que sea la respuesta, el moderado entusiasmo de la gente ante nuestra invitación nos sugiere que el problema de abrir la política a la

sociedad mediante la participación es más complejo de lo que parecía. En este capítulo vamos a analizar la opción participativa como una de las alternativas posibles de apertura del sistema político, considerando principalmente los argumentos que se intercambian los participantes en los grupos de discusión en torno a la posibilidad de implementar procedimientos participativos en las administraciones.

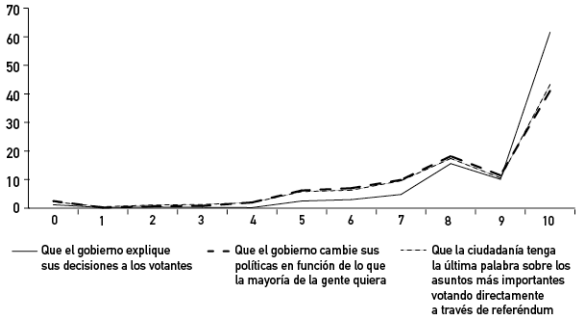
LOS LÍMITES DE LA PARTICIPACIÓN

La tensión entre la participación y la representación está muy presente en las discusiones entre los participantes en los grupos de discusión. Su crítica abierta al modo de funcionamiento de los partidos políticos los lleva ciertamente a debatir sobre una concepción de la política más abierta, lejos de las "relaciones de lealtad" con las que caracterizaban aquellos. No obstante, recordemos que para muchos de los participantes en los grupos la crítica a los partidos y los representantes terminaba generalizándose al conjunto de la ciudadanía, lo que convertía el problema de los malos gobernantes en un problema de la sociedad. Dentro de este contexto, los participantes en los grupos de discusión se inclinaban finalmente por limitar la participación de la ciudadanía en el sistema político. Por eso, quizá, la mayoría de las conversaciones que tienen sobre los límites de la participación no versan en el fondo sobre el sentido adecuado o no de la participación en los sistemas políticos vigentes. Esto no se cuestionaba, los límites surgían al ponderar las condiciones necesarias para que hubiera participación. Así, muchos participantes en los grupos no conversan sobre el valor que tendría la participación en el sistema político, sino que debaten sobre las capacidades de la ciudadanía para participar. Y es ahí donde las opciones de una alternativa participativa se relativizan.

Para hacernos una idea general del contexto de la discusión sobre los

límites de la participación, podemos observar las respuestas que los encuestados dieron al ser preguntados por diferentes maneras con las que la ciudadanía puede intervenir o influir en la política (gráfico 14). Al pedirles que valoraran tres opciones (que el Gobierno explique sus decisiones a los votantes; que el Gobierno cambie sus políticas en función de lo que la mayoría de la gente quiera y, que la ciudadanía tenga la última palabra sobre los asuntos más importantes votando directamente a través de referéndum), vemos que aunque las tres reciben un apoyo considerable, la considerada más indispensable es la primera, que refleja una línea clásica de rendición de cuentas del Gobierno representativo antes que una inclinación por la participación directa de la gente.

GRÁFICO 14
¿QUÉ ES MÁS IMPORTANTE EN LA DEMOCRACIA?



Fuente: PACIS (IESA/CSIC).

En el momento de comparar la participación con otros mecanismos concretos, la inclinación de la ciudadanía por apoyar de forma más sustantiva la función explicativa de los gobernantes plantea esa ambigüedad respecto a la instauración de mecanismos participativos que sugería también la respuesta de los entrevistados al invitarles a debatir en el Parlamento con los representantes políticos. ¿Qué nos dicen los grupos al respecto? En todos ellos, el moderador, después de las críticas realizadas por los participantes al sistema político actual, planteaba un debate en torno a la

posibilidad de que la ciudadanía se implicara de forma más directa en las tareas del Gobierno. La pregunta, con más o menos intensidad, abría un espacio de debate en torno a la idoneidad de la participación. Con las diferencias que ya apreciamos en el capítulo anterior, los participantes valoraban positivamente el hecho de participar, pero nunca de tal modo que implicara la sustitución de los elementos propios de la representación (elecciones, partidos). Muchos participantes buscan modelos mixtos, como sugería la encuesta, a través de procedimientos y formas mediante los cuales la ciudadanía podría participar en los mecanismos de representación. A partir de ahí, en el seno de los grupos se va a negociar ese equilibrio entre ambas formas políticas. ¿Qué sentido tiene entonces la participación? ¿Hasta dónde puede llegar? ¿Se puede compatibilizar con los partidos?

La mayoría de los grupos identifica la democracia con el gobierno de la ciudadanía y, por tanto, hay un acuerdo implícito en que la gente debería tener influencia. Los grupos más vulnerables hablan del "pueblo" o de "los de abajo" [gsc4], mientras que la mayoría de los grupos habla de "ciudadanía". Pero lo que queremos señalar aquí es que tanto los grupos que ideológicamente podrían estar más alejados de la participación *a priori* [los grupos más conservadores: gp2, gp3, gsc1] como el resto entienden que la participación es positiva, como expone un participante del grupo de simpatizantes políticos del PP en el debate que tenían sobre esta cuestión: "Pero, vamos, que me parece muy bien que el ciudadano cada vez tenga más decisión [en la política]" [gp2]. Hay un vínculo imaginario entre la democracia y la participación que se reproduce en todos los grupos y por la que aquella no se puede legitimar sin la participación de la gente. La soberanía en democracia, digamos, pertenece a la gente. Ahora bien, qué se entiende exactamente por participación de la gente en democracia o cómo se debería articular esa soberanía (popular) con el Gobierno abre un debate

diverso. Las diferencias de enfoques en este sentido, así como las consecuencias derivadas de ellos, van a condicionar el sentido de las preferencias de la ciudadanía por los procesos políticos. En lo que sigue, vamos a detallar las diferencias más sustantivas que podemos encontrar entre los grupos de discusión a este respecto, que podemos diferenciar de acuerdo al modo en que relacionan (y diferencian) la participación y la representación.

ESCUCHAR Y OPINAR

Todos los simpatizantes de los partidos, excepto el grupo de Podemos e IU, y la mayoría de los grupos de la sociedad civil vinculan la participación con "escuchar" o, mejor, con hacerse escuchar y opinar. El debate en torno a la participación se diferenciará entre los grupos por la manera de justificar la participación, lo que implicará un modelo más o menos participativo, pero de modo general para casi todos la participación tendría que quedar fuera de las formas de toma de decisión y, por tanto, de las tareas habituales de un Gobierno. Se establece así una diferencia fuerte entre lo que es participar y lo que es gobernar.

Para los partidos tradicionales, la participación posibilita que la voz ciudadana pueda influir en las decisiones, como dice este participante en el grupo socialista: "Yo creo que el tema este de la participación ciudadana del pueblo es una de las bases y pilares… es la voz, es la voz de los ciudadanos, del peatón de a pie, del que sabe los problemas del vecino… Es que creo que la voz participativa de los ciudadanos es muy importante para hacer una buena política" [gp1]. Los simpatizantes conservadores están lejos de reproducir tales argumentos, pero justifican la participación en un sentido similar: se trata de escuchar. Pepe, del grupo de simpatizantes conservadores, culminaba un debate en el grupo sobre la finalidad de la participación, hablando en concreto de los referéndum, de la siguiente

manera: “A mí me parecen muy bien [los referéndum], pero para cuestiones determinadas que no afecten a la estabilidad de un Gobierno… que no sean transcendentales” [gp2].

En los grupos de simpatizantes de los partidos tradicionales la participación se acepta, pero con cautela. La separación entre lo participativo y lo representativo es la más pronunciada entre todos los grupos. Cada uno de ellos tendría una finalidad diferente en un sistema político. Siendo ambos importantes, no deberían mezclarse: “Yo, aumentar los canales de participación, sí; que la democracia directa sustituya a los representantes, no” [gp1]. Además, tanto socialistas como populares hablarán de la participación como algo *ya* presente en las instituciones. Esta diferencia implicaría mantener la participación en un lugar distinto al de la representación en el sistema político, es decir, abogarían por una división de tareas en la que cada una tendría una finalidad distinta. El debate entre los simpatizantes de Ciudadanos nos permite ver mejor las consecuencias que tiene esta separación en los grupos políticos tradicionales. En sus conversaciones no encontraremos referencia alguna a instituciones existentes. Como para socialistas y populares, la participación la van a circunscribir al ámbito de la escucha, pero la separación entre ambas dimensiones responde más a una cuestión ética y de eficiencia, no tanto a una cuestión normativa. Para socialistas y populares, finalmente, la participación no es un problema de que “ahora” no haya mecanismos, como sugiere la nueva política, por lo tanto, tampoco es el momento de ponerse a pensar sobre nuevas formas de participación, sino que el problema reside en la infrautilización de los mecanismos ya existentes.

El planteamiento de los partidos tradicionales abre un debate diferente sobre las causas y los límites de la participación: “Entonces, los mecanismos los tenemos, ¿por qué no los utilizamos? Pienso que por

comodidad, el internet… el pasotismo" [gp1]; "Mecanismos hay y hay facilidades, lo que pasa es que la gente se cree que no le van a echar cuenta y está tan desencantada que no acuden a las instituciones" [gp2]. El problema de la participación reside para ellos en los impedimentos y barreras existentes en los mecanismos actuales, aunque aquí se abren dos formas distintas de abordar tales dificultades. Para los simpatizantes conservadores, el sistema representativo sería la barrera que impide que funcione bien la participación ("la gente ha perdido la confianza en las instituciones políticas hoy día, y eso es lo que yo creo que hace que la gente cada vez participe menos" [gp2]). Para los simpatizantes socialistas, en cambio, el problema de la participación tiene que ver más con una cuestión de motivación que impide a la ciudadanía utilizar eficazmente los mecanismos existentes. En un debate en el grupo de los socialistas acerca de las capacidades de la ciudadanía para participar, Mario intenta sintetizar el debate aceptando el argumento de que los jóvenes son la generación más preparada. Sin embargo, esa preparación no parece llegar a la participación, ni a la política: "Luego la preparación existe, otra cosa es que existan ganas, voluntad" [gp1].

Rocío, del grupo de los simpatizantes conservadores, ponía el acento por ejemplo sobre los Consejos Abiertos que, a pesar de funcionar solo en pueblos "muy chiquitos", se podrían hipotéticamente aplicar en más ciudades. Precisamente ese modelo "sería", dice, "una manera de participación ciudadana, no movida por un partido, ni de ir en contra de no sé qué, de rechazo, de enfado como pasa con el 15M y todo el mundo a la calle… pero que sí, creo que [los Consejos Abiertos] serían una participación constructiva" [gp2]. Esta concepción de la participación destila un modelo de implicación política no conflictivo, que se enfrenta precisamente a unos nuevos modos de participación que, según ella, pueden

traer más desorden que otra cosa y que se vinculan en su imaginario al 15M, las protestas y, en definitiva, a los nuevos partidos. En tanto en cuanto participación y representación tienen finalidades distintas, la participación debe darse en un escenario no-conflictivo, casi diríamos que en un escenario no-político, porque la política está en otra parte. En definitiva, se trata de que el sistema sea capaz de escuchar lo que la gente dice, no de que la gente gobierne, como piensan que quieren "esos" de los nuevos partidos.

Para estos grupos no hay ningún dilema en defender la representación normativamente, porque si todo funcionara idealmente, se hablaría menos de participación, como dicen los simpatizantes socialistas, "si los partidos cumplen, [la participación] no hace falta" [gp1]. De este modo, para los grupos políticos tradicionales, el buen funcionamiento del sistema representativo es la mejor garantía de un Gobierno, donde incluso la participación dejaría de ser necesaria; por tanto, lo que parece que haría falta sería mejorar las instituciones representativas para escuchar mejor lo que quiere la gente.

LOS LÍMITES DE LA ESCUCHA

Esta diferencia que los partidos tradicionales hacen entre la participación y la representación es ampliamente compartida por la generalidad de los grupos de la sociedad civil y por los simpatizantes de Ciudadanos. Pero la forma de justificar la separación entre ambas dimensiones es diferente. En principio, hay una inclinación similar a aceptar la participación, aunque esta vez se acentúa la influencia que han tenido estos nuevos tiempos en multiplicar su presencia. Ahora bien, para preservar esa separación entre participación y representación, los participantes en estos grupos no suelen hacer uso de argumentos normativos, sino que discuten con razones más contingentes como las carencias de la ciudadanía para hacer uso de la participación o la escasa eficiencia de un sistema participativo en sistemas

políticos complejos.

Los grupos más instruidos, los trabajadores cualificados y los estudiantes universitarios, justifican esa separación, por ejemplo, en términos de eficiencia y preparación. Ellos no cuestionan la importancia de la participación. Los estudiantes universitarios comienzan el debate acerca de la participación afirmando que las grandes decisiones deberían ser participativas [gsc3], un terreno al que no llegan los trabajadores cualificados, aunque tampoco desprecian la participación. Sin embargo, el diálogo sobre la participación lleva a ambos grupos a hablar inmediatamente de su viabilidad y ahí ponen de manifiesto sus límites. En estas conversaciones surge con rapidez la falta de preparación de los españoles para participar o la escasa agilidad de un proceso de toma de decisiones participativo.

El hecho de emplear elementos más contingentes en la justificación hace que el debate sobre el papel de la ciudadanía en la política adquiera más notoriedad y sea a su vez más complejo que para los grupos políticos tradicionales. El grupo de estudiantes universitarios es más abierto en su concepción participativa, aunque quizá por eso mismo es también más pesimista que el de los trabajadores cualificados. Los primeros, al contrario que los segundos, diferenciarán entre las capacidades de los ciudadanos y los conocimientos que tienen para participar [gsc3]. Habría que cambiar hábitos y enseñar a participar en política desde pequeños [gsc3]. La educación se vuelve la clave de los jóvenes universitarios para abrir la política.

Los trabajadores cualificados, por el contrario, mantienen un debate menos encendido sobre los límites de la participación. Ellos, como los grupos políticos tradicionales, terminan por asimilar la participación dentro de las instituciones representativas, pero no tanto por una cuestión

normativa como porque sería la única vía aceptable hoy día. Se entiende la protesta popular y la emergencia de nuevos partidos por una situación económica crítica y unos representantes que no responden a lo que los ciudadanos piden [gsc1]. Sin embargo, la justificación empleada para separar la participación de la representación ("no es ágil"), lleva el debate sobre la participación a su capacidad para gestionar y administrar: "Yo creo que la democracia tiene que ser representativa porque somos muchos millones de personas y administrar eso tiene que ser a través de representantes y delegar. Ahora bien, esa delegación debe ser muy transparente" [gsc1]. Mediante esta argumentación se empieza a ver la representación también como parte de la solución, pero solo a costa de haber pensado que la ciudadanía no está preparada. Administrar, gobernar, gestionar, al fin y al cabo, son tareas complejas que exigen una responsabilidad que, según ellos, los ciudadanos no pueden ni quieren asumir, como dice un participante en el grupo al traer la imagen de una comunidad de vecinos en la que nadie quiere ser presidente [gsc1].

Desde el principio, el debate entre los participantes del grupo de Ciudadanos acerca de la participación es menos espontáneo. Hablar sobre la crisis política implica para ellos debatir, sobre todo, las reformas del Estado para mejorar una situación caótica. En este grupo quizá sea donde el vínculo entre democracia y participación es más débil. Si los socialistas o los grupos progresistas empiezan a hablar de participación casi inmediatamente después de preguntarles sobre el sistema político actual, aunque sea para orillarlo normativamente, los simpatizantes de Ciudadanos no lo hacen hasta que el moderador plantea el tema. En ese momento, un miembro del grupo habla a favor del referéndum como una vía aceptable para considerar la voz de la ciudadanía e inmediatamente casi todos los demás participantes se prestan a detallarle los problemas que conllevaría

que la ciudadanía se implicara hasta ahí en la política:

Esmeralda: Pero eso del referéndum tiene que estar muy acotado, si no este país no funciona.
Paco: Claro, claro.
Alicia: Además creo que no tenemos la madurez necesaria.
Esmeralda: Eso es ingobernable [gp3].

La conversación pone de relieve las dificultades que tiene la ciudadanía para imaginar un proceso político basado en mecanismos de participación directa. El referéndum, como para los trabajadores cualificados es poco ágil [gp3], pero también es inviable, como lo era para los estudiantes universitarios, con una población que "no es madura", que, en definitiva, "no sabe" [gp1]. El problema, no obstante, no es de capacidades, sino de conocimientos, como para los universitarios. Ante la pregunta del moderador, se afirma que lo primero sí existe, pero que lo que faltan son conocimientos: "Entonces, el principal problema está en que tenemos que informarnos, culturizarnos y movilizarnos" [gp3].

El hecho de diferenciar entre capacidades y conocimiento les permite abrazar soluciones al dilema planteado por la participación. Ahora bien, esto circunscribe la cuestión participativa a una dimensión de escucha y opinión. Desde esta perspectiva, como pasaba en los grupos políticos tradicionales, casi todos estos grupos buscan finalmente diferenciarse del aire participativo y "asambleario" con el que identifican los nuevos tiempos. Un participante del grupo de Ciudadanos lo sintetiza culminando una conversación ya al final del grupo de discusión: "Que haya más elementos democráticos, vale, pero esto no significa que por participar en mayores asambleas tengamos una democracia mucho más consistente. En eso no estoy de acuerdo" [gp3]. Al final del debate parece como si la participación no formara ya parte de la esencia de la democracia. Así se termina por vincular la participación a una regeneración del sistema

representativo, que abra, por ejemplo, los partidos a la sociedad y que ponga límites a las relaciones de lealtad que caracterizan el funcionamiento del sistema político actual, pero muy lejos de la implementación de un sistema político propiamente participativo. Como sugerían los debates en los grupos políticos tradicionales, en un contexto político adecuado, la participación sería entonces prescindible también para Ciudadanos: "Si tuviésemos una persona que realmente nos representa, pero auténticamente… por qué voy a tener que ir yo personalmente. O sea, el problema ahí está en que no tenemos unos buenos representantes" [gp3].

'SERÍA PEOR'

Para ver en perspectiva la visión que tienen los grupos de discusión anteriores, resulta ilustrativo ver el debate y los argumentos de los grupos más vulnerables (los trabajadores precarios y los jóvenes sin estudios, ni trabajo) y los mayores. Su discurso y argumentación no es completamente diferente al del resto de los grupos, pero en sus conversaciones no hay muchas alternativas después de caer en ese cataclismo cívico (los ciudadanos no saben) que muchos otros grupos sorteaban.

Los grupos más vulnerables diferencian igualmente participación y representación. La separación también se sustenta sobre elementos que tienen que ver con la preparación de la ciudadanía para hacer política [gsc2] o la falta de agilidad de la participación [gsc2]. El grupo de mayores no dedica mucho tiempo a hablar de participación y siempre que lo hace es a partir de la intervención del moderador. Ellos no contemplan separación alguna entre participación y representación, pero coinciden con los grupos más vulnerables en el resto de las cosas, sobre todo en la necesidad de una reforma moral de los políticos, antes que en una reforma participativa del sistema político.

En el grupo de los trabajadores precarios la discusión sobre la participación nunca es espontánea, es siempre introducida por el moderador. Pero rápidamente la orillan para regresar a un tema anterior o hablar de cualquier otro. Después de haber criticado de manera sustantiva a los partidos y los representantes, el dilema de la participación, sugerido por el moderador, les abre un interrogante crítico. En términos generales, aceptan la idea de que la ciudadanía "debe tener influencia", incluso mucha [gsc2], pero rápidamente un miembro del grupo plantea la pregunta de "¿cómo?". Nadie sabe responder hasta que una mujer relata la experiencia de los presupuestos participativos unos años antes en la ciudad en la que se hacía el grupo de discusión (Algeciras). Muchos conocen la experiencia, que empezó en el año 2008 y terminó en el año 2010, y el debate se centra en "¿por qué no funcionó?". El relato es muy similar al que sostenían los grupos de simpatizantes de los partidos tradicionales. El sistema que precipitó la crisis impediría, en sus palabras, cualquier experiencia que pretendiera dar poder "a los de abajo". La clave que impide ese desarrollo para ellos reside "en la cadena de favores" [gsc2] que tiene lugar "dentro" de las instituciones y que distorsiona cualquier fin bueno de la política. Hasta aquí el relato es muy similar al de los grupos anteriores, aunque con otras referencias, al incidir de nuevo en el funcionamiento de la política (en especial las relaciones de lealtad) como barrera y límite a la participación. Finalmente, sería el sistema representativo y cómo funciona este lo que "estropea" todo. Ahora bien, cuando el moderador insta al grupo a reflexionar sobre la viabilidad de la participación, no sobre la adecuación de la participación de la ciudadanía en democracia, la mayoría de los participantes en los grupos vulnerables se olvidan de este esquema. Como ejemplifica uno de los participantes en el grupo de trabajadores precarios, su posición es muy contraria a la participación: "El gobierno participativo

sería peor todavía" [gsc2: 43].

Al hablar de participación, ninguno de estos dos grupos diferencia entre capacidades y conocimiento de la ciudadanía. La imagen del ciudadano desde esta perspectiva es deplorable. Para ambos grupos la ciudadanía es egoísta, solo piensa en sí misma y es por ello conflictiva, como dice uno de los participantes en el grupo de jóvenes sin estudios, "si gobierna el pueblo habría muchos conflictos" [gsc4]. Si la participación en abstracto es aceptada como algo atractivo, en el momento de pensar su viabilidad, la mayoría de los participantes en ambos grupos rechaza radicalmente esa posibilidad. El grupo se posiciona en contra por las dificultades desde un punto de vista de gestión, pero, sobre todo, por la calidad humana y moral de la ciudadanía, como puede apreciarse en esta discusión en el grupo de trabajadores poco cualificados[4]:

Isaac: Un gobierno participativo sería hasta peor todavía, porque la gente es lo que mira. Nada más que mira por el dinero.
Elia: Nos sacaríamos los ojos unos a otros.
Isaac: La gente nada más que mira por el dinero. La gente no mira por el bien del otro nunca, sino por el bien suyo, es lo único que les importa. Entonces, lo primero que hay que educar son las mentes.
Pedro: Eso te iba a decir yo.
Isaac: Eso es lo primero, volver atrás y educar las mentes.
Manuel: Pero también es así, yo digo ahora mismo "¿nos quedamos hasta las 10 y os doy 200 euros a cada uno?" Y de aquí no se va ni Perry, ¿me entiendes?
Elia: Yo me quedo hasta las tres de la mañana si hace falta.
Manuel: Eso es así. Y no podemos jugar con la ciudadanía porque la ciudadanía es así [gsc2].

El discurso de los mayores en este apartado coincide en que la participación sería inviable. Ellos piensan en la imposibilidad de alcanzar acuerdos entre muchos, y ponen de ejemplo lo que ocurre en el mismo grupo de discusión [gsc6]. Esta oposición a la participación como forma de gobierno vuelve a poner en el centro del debate el sistema representativo y, como pasaba en los otros grupos, la representación se vuelve también parte

de la solución. Y así es para algunos participantes, hasta el punto de justificar la centralidad de la representación con argumentos más normativos. Para Manuel, muy vehemente en su crítica contra el funcionamiento de los partidos a lo largo de todo el debate entre los trabajadores poco cualificados, termina justificando la separación de funciones entre políticos y ciudadanía: "Entonces, si ellos están estudiando para un trabajo, no vamos a ir el pueblo a hacer su trabajo, porque no voy a hacer el trabajo del arquitecto tampoco. Entonces, el pueblo no puede gobernar, el pueblo tiene que elegir, porque el pueblo no está preparado" [gsc2].

DECIDIR, PERO EN OTROS TIEMPOS

Los grupos más progresistas, los simpatizantes de Podemos e IU o los miembros de organizaciones altermundistas [gp4; gsc5], plantean un debate diferente. Tiene muchas semejanzas con los grupos vistos hasta ahora en la solución final, pero la diferencia más apreciable reside en la apuesta decidida por conservar, en todos los argumentos y justificaciones que se hace sobre el sistema político, la dimensión participativa. Son estos grupos los que mejor representan el valor que tiene la participación en una posible reforma política. Desde este punto de vista, la separación entre participación y representación es la más difusa, lo que va a llevar a los participantes a afrontar, más que en ningún otro grupo, las contradicciones de la participación.

Los participantes de estos grupos entran inmediatamente a conversar sobre la participación en política una vez el moderador plantea el debate sobre el sistema político actual. No hace falta mencionarla, ni introducirla, como si estuviera asociada literalmente a la cuestión política. Además conocen y mencionan instrumentos o experiencias participativas, lo que da a los grupos un mayor grado reflexivo sobre la participación. La

democracia, para ellos, solo adquiere sentido junto con la participación ciudadana. Incluso si muchos participantes finalmente no se oponen a un modelo representativo, es siempre una representación valorada a partir del grado de participación de la ciudadanía, lo que ya de por sí plantea un modelo de participación que va un poco más allá de la "escucha", como dice una de las participantes en el grupo de las asociaciones altermundistas: "Yo creo que son compatibles las dos cosas. En un mundo ideal podría ser todo con sistemas asamblearios, pero yo creo que la representatividad, siempre que sea una representatividad verdadera y transparente, y que estén todos siempre rindiendo cuentas e intercambiando y preguntando a la gente, yo no veo mal la representatividad" [gsc5].

El gran dilema para estos grupos es el mismo que afrontaba el resto. Si la participación nos ofrece el vínculo político con la democracia, ¿hasta qué punto se puede efectivamente participar y cómo se puede hacer en una sociedad compleja y plural? El problema no va a residir esta vez en la naturaleza moral de la ciudadanía o en su grado de preparación; al menos, estos no serán problemas directos. Si la gente puede o no participar es la consecuencia de un sistema de dominación político. Ellos consideran que se participa poco, pero esto no ocurre tanto por los fallos del sistema representativo como por un problema cultural sistémico, lo que lleva las conversaciones alrededor de las prácticas políticas: "Eso es la victoria cultural del neoliberalismo, el atomizarnos y hacernos individuos pobres, aislados, indefensos, únicos…" [gp4].

Las conversaciones entre los participantes de ambos grupos van a incidir constantemente en "la cultura política" de la ciudadanía. Con ello tratan de sortear la descalificación hacia las capacidades de la ciudadanía y situar el debate en un escenario diferente. "El problema es la cultura política… O sea, tú puedes poner las instituciones políticas superparticipativas y la gente

a lo mejor se queda en su casa viendo el Sálvame" [gp4]. Sin hablar de ello, en el fondo parecieran sugerir que la ciudadanía está alienada. Los cambios imaginados se muestran así tan titánicos como los que afrontaban los estudiantes universitarios, porque el gran problema es la educación de la gente [gp4].

Esa "cultura" que falta es la que hace inviables muchas de las reformas políticas imaginadas. Aquí se presupone un modelo de participación diferente al sostenido por el resto de los grupos. Si los grupos políticos tradicionales defendían un modelo no conflictivo de participación, los participantes más progresistas sitúan el problema precisamente en una cultura política que impediría el conflicto. Como cuenta Olga en un debate encendido en el grupo de simpatizantes de Podemos e IU, una de las debilidades para participar es la aversión al conflicto de la ciudadanía, que se debe principalmente a la educación recibida: "O sea, por mucho que participemos en las instituciones, las instituciones no favorecen ese, ni siquiera esa educación para el conflicto que tú has dicho, ¿no? No estamos educados para el conflicto" [gp4].

La diferencia fundamental con el resto de los grupos es que ellos hablan de una cultura asociada a las prácticas institucionales, por tanto, es reversible si se pueden modificar las instituciones. No obstante, al hablar de prácticas culturales, el debate sobre las dificultades de la participación se desplaza a un terreno menos pragmático. En las conversaciones entre los participantes de estos dos grupos siempre está presente la cuestión de la alienación, de la dominación de las prácticas políticas, que implica cierta no-consciencia de lo que la misma ciudadanía hace. Se podrían impulsar todas las iniciativas participativas que uno pudiera imaginar, pero al final la gente se dejaría llevar por otros, reproduciría "la información que les llega" y eso está "completamente controlado" [gp4]. Esto llevará a alguno en la

conversación incluso a cuestionar el impulso de la participación, porque "es legitimar las decisiones de los poderosos" [gp4]. Por tanto, la cuestión de la participación se vuelve mucho más compleja de lo que parecía al principio.

Como en todos los grupos anteriores, al final, el propio funcionamiento del sistema impide el buen desarrollo de la participación. Los que gobiernan siempre van a poner problemas. Pero en este caso no se trata únicamente de malas prácticas de gobierno, sino que hay para ellos una expresa manipulación por un sector dominante, que está incluso al margen de los partidos y los representantes; es todo un sistema cultural. Lo que al principio era una lucha educativa se transforma en estos grupos en una lucha por el poder. Además de conocimientos, haría falta la conformidad de los poderes supraestructurales u ocultos que manejan los hilos de lo posible, tal y como ejemplifica en la misma conversación de antes Olga, al recordar el caso del referéndum griego en julio de 2015 contra las condiciones del rescate impuestas por la Unión Europea, El Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo: "Y aunque lo estuviéramos [educados para el conflicto], también tenemos que entender que nosotros estamos en España. Pero es que como en Grecia, por mucho que la población se pusiera de acuerdo en un 60, 70%, respaldando una posición colectiva, social y representativa, tenemos otros poderes que no nos van a dejar ejercerlo" [gp4].

Lo ambiguo de este planteamiento es que, como para muchos otros grupos que hemos visto, haría falta mejorar el sistema representativo. Ciertamente, en este caso, se trataría de mejorar "la fiscalización" ciudadana de los órganos representativos [gsc5], antes que simplemente "escuchar", lo que supone una acción mucho más sofisticada. Pero, como los otros grupos, eso solo parece ser posible con una cultura política distinta. Estos grupos ponen de relieve, más que ningún otro, las

contradicciones de la política contemporánea y, en este sentido, sacan a relucir las contradicciones de la participación en una época en la que todas las administraciones favorecen experiencias participativas. La separación de la política respecto a la ciudadanía es una crítica repetida en todos los grupos. En cambio, los grupos progresistas dan la vuelta al argumento. Las instituciones políticas más cercanas son los ayuntamientos, donde, por otro lado, se centran la mayoría de las experiencias participativas. Pero justamente los municipios han perdido mucho poder de acción, lo que, para ellos, dificultaría aún más una reforma participativa, pues para que la participación tuviera eficacia haría falta un viraje del sistema, es decir, que los ayuntamientos tuvieran realmente más poder. Desde este punto de vista, un aumento de la participación sin cambiar el sistema político podría no ser un gran logro, incluso ellos no participarían, porque

> para eso el Ayuntamiento tiene que tener más poder, que es la institución más cercana que tenemos. Eso al final podría llegar, pero el poder tiene que estar en lo local… Pero si realmente queremos que sea el pueblo el que pueda tener una participación real y no solo de consulta y tal, pues tiene que ser en lo cercano, y es al revés, ¿no? Cada vez nos vamos, cada vez hay más decisiones que se toman en la Unión Europea [gsc5].

El peso que adquiere para estos grupos la dominación cultural terminará también por relativizar las críticas al sistema representativo que, como hacían la mayoría de los otros grupos, se convierte en parte de la solución. El problema, de todas maneras, es distinto para ellos, porque no es solo la representatividad, sino "cómo está construida la institución que recibe esos partidos cada x años" [gp4]. Aquí es donde se sugerirán cambios procedimentales en el diseño de las instituciones representativas para mejorar su funcionalidad, en un sentido además muy diferente al de un ciudadano que habla y es escuchado. Ellos abogarían por incidir en una actitud de control, para lo cual proponen instaurar mecanismos que permitieran a la población revocar un cargo político [gp4]. Esto significaría

dar el poder a la ciudadanía (en detrimento de los partidos) no para gobernar, sino para decidir un cambio político en las instituciones. Este discurso es más claro entre los miembros de las asociaciones altermundistas, para quienes no se puede eliminar totalmente la representación: "Hoy por hoy todavía necesitamos ese poquito de representatividad" [gsc5]. Ambas dimensiones de la democracia, la participación y la representación, son finalmente compatibles, siempre y cuando la representación sea genuina [gsc5].

En términos generales podemos concluir que la participación plantea un debate que no se resuelve de forma absoluta afirmando o negando su operacionalización. Ningún grupo de discusión mantiene una postura completamente negativa hacia la participación, aunque esto no significa que haya un apoyo transversal al hecho de participar. No es, por tanto, un juego de suma cero. La participación en sí misma es bien valorada, pero es cierto que la mayoría de los grupos plantea problemas y dificultades a una reforma política basada en la participación ciudadana. No hay referencias culturales que sostengan una apuesta participativa, porque se piensa bien que la ciudadanía no tiene conocimiento o bien que está dominada políticamente; el caso es que cualquier propuesta participativa encuentra límites significativos en el imaginario de la gente. ¿Puede la participación, en este contexto político que se imaginan los ciudadanos, ayudar a mejorar el sistema político? La respuesta sería tanto un sí como un no, pero nunca es considerada un sustituto eficiente de los mecanismos representativos, al menos, en la actualidad. Como adelantábamos en el segundo capítulo a través de la encuesta realizada, la opción más verosímil sería pensar que la población se inclina por modelos mixtos, en los que haya participación y representación.

Aquí cabría preguntarse por el sentido que tiene entonces la crítica al

sistema político. No podemos olvidar que uno de los elementos más reiterados por la ciudadanía en los grupos de discusión al debatir sobre la crisis política es lo poco "preparados" que están los representantes para gobernar (igual que los ciudadanos). El experto o técnico precisamente se caracteriza por tener un conocimiento especializado, por tanto, se puede suponer que estaría más preparado para las tareas de gobierno. Ambas cuestiones convierten la hipótesis de los gobiernos de expertos en algo plausible. ¿Esconden, efectivamente, las reticencias a la participación un interés por una deriva tecnocrática? El siguiente capítulo lo dedicamos enteramente a dilucidar hasta qué grado la ciudadanía apoya o no un tipo de gobierno caracterizado por procesos técnicos de toma de decisiones.

CAPÍTULO 4

LOS DESAFÍOS DEL CAMBIO POLÍTICO: EL MÉRITO Y LOS EXPERTOS

EL (APARENTE) IRRESISTIBLE ENCANTO DE LOS EXPERTOS

Hasta ahora hemos valorado el dilema genérico entre representación y participación. Sabemos, con los grupos de discusión que vimos en el tercer capítulo, que la inclinación hacia modelos mixtos, más participativos de lo que los ciudadanos perciben que es el sistema político actual, no significa que la ciudadanía apoye un sistema sin partidos y sin representantes. Esta disyuntiva alrededor de la participación (una especie de "sí, pero no") se relaciona con la importancia que la ciudadanía otorga al conocimiento como un elemento necesario para las tareas de gobierno. Como vimos en el capítulo anterior, muchos participantes en los grupos de discusión pensaban que la ciudadanía no tenía esos conocimientos necesarios para cualquier actividad política. No es extraño, entonces, pensar que si los expertos se caracterizan por poseer conocimiento, estos pudieran constituirse en una opción real al pensar alternativas al sistema político actual. Esta es una hipótesis ampliamente explorada por investigaciones actuales (Hibbing y Theiss-Morse, 2002; Font *et al.*, 2012). ¿Qué piensa la ciudadanía al respecto?

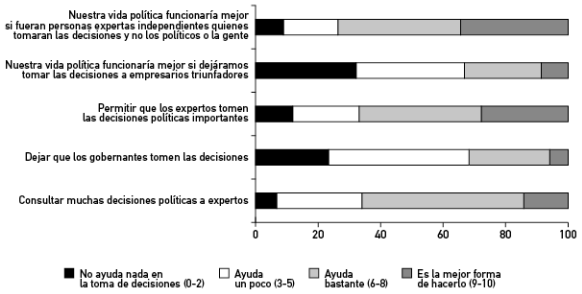
Para obtener una imagen general del problema, la encuesta realizada en Andalucía por el IESA nos ofrece una información detallada. La encuesta profundizaba en las valoraciones que hacía la ciudadanía sobre diferentes

mecanismos concretos de toma de decisiones políticas, incluyendo indicadores sobre el protagonismo que debía concederse a los expertos. Una primera mirada a buena parte de los indicadores disponibles nos muestra un considerable apoyo a conceder protagonismo a los expertos en el proceso de toma de decisiones. El gráfico 15 muestra cinco indicadores, de los que tres miden directamente la valoración ciudadana sobre el potencial protagonismo de los expertos en un Gobierno. Cualquiera de las tres alternativas recibe un nivel de apoyo mayor que las otras dos contempladas aquí, tanto la que podría identificarse como el modelo propio de una democracia representativa "pura" (los gobernantes toman las decisiones), como otra alternativa que algunos han considerado cercana a la del Gobierno experto, un Gobierno formado por empresarios exitosos (Hibbing y Theiss-Morse, 2002). Los datos nos revelan que dos tercios de la muestra se inclinarían por que expertos independientes tomaran decisiones importantes, tanto si lo preguntamos en un formato que solicita "estar de acuerdo o en desacuerdo", como si pedimos el apoyo a esa forma de gobierno en una escala de 0 a 10. Esa cifra se ampliaría aún más si en lugar de preguntar por tomar decisiones preguntamos por "consultar". El atractivo aparente de la idea del Gobierno experto parece irresistible.

¿Por qué hay un apoyo tan decidido a los expertos? Los grupos de discusión nos ofrecen algunas claves para conocer mejor este "irresistible encanto". Lo primero que habría que decir es que si la figura del experto tiene éxito en el relato sobre la política en los grupos es sencillamente por su especialización. Ellos son los que encarnan, mejor que ninguna otra figura en nuestras sociedades, el conocimiento frente a, por ejemplo, la ciudadanía o unos políticos "poco preparados". Y como para casi todos los grupos el conocimiento es básico para gobernar, los expertos tienen un atractivo singular.

Recordemos que la principal crítica al funcionamiento del sistema político eran las relaciones de lealtad en el seno de los partidos. La preeminencia de ese tipo de relaciones tenía, para la mayoría de los grupos, un efecto perverso sobre la política. No solo porque un sistema así alimentaba la corrupción y el clientelismo, sino que favorecía también la llegada de políticos "mediocres", en definitiva, políticos "que no están preparados". Esa es una pieza angular en el debate en torno a la crisis política y es lo que hace que muchos participantes pongan en valor el mérito como uno de los criterios fundamentales para incorporarse a la política. El técnico o experto encarna muy bien esa idea del mérito; un profesional, en definitiva, que se ha ganado su puesto de acuerdo con los conocimientos que tiene sobre una materia particular.

GRÁFICO 15
EL IRRESISTIBLE ENCANTO DE LOS EXPERTOS



Fuente: PACIS 2015 (IESA/CSIC).

Esto lleva a muchos participantes a mirar a los representantes políticos en el espejo del conocimiento y, en consecuencia, a contrastarlos con el mérito que sí tienen los expertos. Por ejemplo, para los simpatizantes del PP, el problema es que no tenemos políticos profesionales, pues "para ser político no hace falta nada" [gp2], cuando "deberían haber trabajado antes en otra cosa" [gp2]. En el grupo de Ciudadanos se plantea el problema en un tono muy similar: "[El político] tendría que tener un bagaje profesional, no

directamente meterte en política sino trabajar antes en la calle" [gp3]. Aquí no importa, además, la ideología, pues el relato, con más o menos intensidad, es muy similar en la mayoría de los grupos. Para los simpatizantes socialistas los políticos "deberían saber más" y habría que poner personas que supieran [gp1].

Los jóvenes son los grupos de la sociedad civil más defensores de la figura del técnico, es decir, el mérito parecería ocupar para ellos un lugar más preponderante en sus preferencias políticas. Para los jóvenes sin estudios los técnicos "saben de verdad". Cualquier aspirante a gobernante debería emular el sentido meritocrático de la carrera de un profesional. Hablando del presidente del país, según estos jóvenes, "para gobernar, mínimo hay que tener una carrera o dos, y estar preparado, no que [Rajoy] no sabe ni inglés" [gsc4]. En un tono similar, los universitarios comparan los requisitos que tiene que cumplir una persona que quiera dedicarse a ser basurero con los que son necesarios para ser político, lo que los hace volcarse a exigir capacidad y conocimiento a los que se dediquen a la política: "En la Ley le están exigiendo a un basurero el bachillerato, ¿por qué no le tengo que exigir yo una carrera… a un político? Hay muchos políticos que tenían el graduado y a duras penas" [gsc3]. Para los trabajadores más privilegiados, el político debería saber más del campo del que es responsable [gsc1]. Solo los trabajadores poco cualificados tienen un discurso de rechazo a la meritocracia como elemento vertebrador de la política, algo que trataremos más adelante.

Puede que esta idea sobre la importancia del mérito influya en ese "irresistible encanto" que parecen adquirir los expertos. Ahora bien, ¿efectivamente se da el salto para reclamar un gobierno tecnocrático? Según los participantes en los grupos, una cosa es hablar en términos generales y otra concretar esa carrera meritocrática en un gobierno

democrático, donde un gobierno de expertos choca frontalmente con la idea de un gobierno del pueblo, es decir, con la idea de soberanía que reside, como vimos en capítulos anteriores, en la gente. Aquí la orientación y el valor que adquieren los expertos y la meritocracia presentarán diferencias notables entre los grupos.

Estas diferencias empiezan a emerger cuando el debate entre los participantes de los grupos cambia el foco de atención, de los rasgos positivos del mérito en la política a la viabilidad de un gobierno caracterizado por la meritocracia. En varios de los grupos la cuestión se cristaliza cuando la conversación gira hacia la profesionalización de los ministros (que un ministro de Sanidad, por ejemplo, sepa de medicina), como entre los simpatizantes de Ciudadanos o las asociaciones altermundistas. Y la respuesta global ante el desafío de un gobierno de expertos será más negativa que positiva. A partir de aquí se entra a conversar sobre las diferencias entre técnicos y políticos o sobre el papel que los técnicos deberían tener en política, pero una vez ha quedado claro que la demanda de méritos en la política tiene que servir para evitar "el clientelismo" y "el enchufismo", no para que el gobierno se organice únicamente desde una dimensión técnica.

Para los grupos políticos más conservadores (PP y Ciudadanos) la tecnocracia recuerda a la época predemocrática, al modo de funcionamiento del Gobierno de Franco, donde todos los ministros eran "número uno" de sus respectivas oposiciones [gp2; gp3]. Los participantes en los grupos más progresistas (Podemos e IU, altermundistas), en cambio, no son tan radicales en su rechazo, aunque son los únicos que destilan una crítica política a la figura del técnico.

Los dos grupos más polarizados respecto a este tema son los estudiantes universitarios y los trabajadores precarios. Estos últimos ni siquiera se

adhieren a la idea del mérito. Sus conversaciones al respecto no levantan un gran debate entre ellos y, además, quedan dominadas por la figura de un experto aislado de la realidad, que "no tiene en cuenta a las personas" [gsc2]. Rápidamente avanzan en sus conversaciones las consecuencias que tendría un gobierno de expertos, que solo recorta y encaja números, para una población que ya de por sí se percibe con pocos recursos: "Si a un matemático no le salen las cuentas, ahí sí que nos lo quitan todo" [gsc2]. En este caso, el gobierno técnico no levanta ninguna simpatía, ni siquiera para reemplazar a unos políticos que han criticado de manera mordaz previamente. En el otro extremo estarían los estudiantes universitarios. Para ellos, la cuestión de los expertos es importante y le dedican bastantes minutos en el grupo de discusión. Tienen claro, como el resto de los grupos, que el Gobierno debe ser una elección del "pueblo" y algunos dentro del grupo hablarán incluso de la viabilidad de un gobierno de expertos, siempre y cuando sea elegible periódicamente [gsc3]. No todo el mundo está de acuerdo con esa postura, por lo que el debate seguirá otro hilo, intentando preservar esa figura de un profesional elegido por sus méritos. Esto los llevará a intentar traducir ese sistema (de expertos) dentro de los estándares democráticos, que se fundamenta para ellos en la temporalidad de cualquier gobierno (ser elegible y revocable). Desde este punto de vista discutirán cómo se podría instaurar un gobierno político (no de expertos), pero "por oposiciones" (como en el mundo de los técnicos) [gsc3].

Esta visión idealizada de los expertos choca con la de los grupos más progresistas. Apuntábamos antes que no rechazaban radicalmente su figura, sin embargo, su crítica a la posibilidad de que gobiernen es más contundente. El técnico representa para ellos un estilo social, que refleja las desigualdades existentes. Los expertos tienen ideología y se deben a una forma de ver la sociedad [gp4]. En este sentido, los expertos no son

neutrales, forman parte del grupo que domina, el cual perpetúa las desigualdades sociales, porque "normalmente vienen de las clases altas, de familias adineradas" [gp4]. Ellos plantean así diferencias entre técnica y experiencia [gsc5]. Lo primero viene con los títulos académicos, lo segundo con el contacto real en la vida, mediante, por ejemplo, el trabajo [gsc5]. Con esta diferenciación, sugieren que cualquier persona sin estudios puede tener una experiencia valiosa desde el punto de vista de la gestión pública y que la idea de tener un conocimiento especializado no tiene por qué estar asociada a buenas universidades y grandes títulos: "Probablemente necesitamos conocimientos en algunos momentos más técnicos, científicos, pero, digo, también necesitaremos conocimientos como tú dices, de los trabajadores y trabajadoras del campo, de, no sé, de la pesca, o sea, necesitaría tener mucha más información, más que de un técnico que solo se ha formado en la universidad, ¿no?" [gsc5].

Por último, otro argumento para rechazar un gobierno liderado por expertos viene al comparar los expertos con las cualidades morales de la ciudadanía. Recordemos que el problema de la política era desplazado por muchos participantes en los grupos a un problema sobre el "carácter" de los españoles o las miserias del ser humano. Por ejemplo, los trabajadores cualificados habían planteado la crisis política como un problema social, que dependía de cómo eran los españoles. En cambio, su rechazo a los técnicos en un supuesto Gobierno descansa en una diferenciación normativa de funciones entre gestión y gobierno [gsc1]. Para los simpatizantes de Podemos, en cambio, los técnicos, que son asociados con las clases altas, no pueden zafarse del déficit de cultura de debate entre los españoles, que no tienen "capacidad de discrepancia", que "evitan el conflicto". Eso hace que los expertos sean, como todos, manipulables y "le acaban diciendo al poder siempre lo que el poder quiere escuchar" [gp4].

Muy diferente será la defensa que los grupos más conservadores políticamente (Ciudadanos y PP) hacen del saber de los expertos, similar a la que hacen los trabajadores cualificados. El rechazo radical al gobierno de expertos descansa para ellos en una diferenciación funcional entre políticos y técnicos. Unos gobiernan y otros gestionan. El problema para ellos no es ese, sino precisamente que esa separación no se respeta por parte de los políticos: "Yo creo que el funcionario de carrera, desde mi perspectiva, debe de tener un peso que no tiene… hoy en día hay un montón de cargos de confianza… que al final es un coladero del partido del Gobierno" [gsc1].

En este debate sobre el lugar que debe ocupar el saber técnico en un sistema político, los grupos de simpatizantes socialistas y trabajadores precarios son los que rechazan de forma más sustantiva su valor. Para los primeros, los técnicos son importantes, pero tienen muy claro que la política es otra cosa y no le dedican mucho tiempo en el debate. Rápidamente la conversación se orienta a mejorar la elección de los políticos. El grupo de trabajadores precarios es el que menos tiempo habla sobre este asunto, rechaza de forma radical el valor de los técnicos en los sistemas políticos.

Podemos observar cómo unos grupos muestran una línea de defensa más notoria sobre la tecnocracia, aunque ningún grupo, como acabamos de ver, renuncie a la idea de que un gobierno democrático tiene que ser elegido y, por tanto, no cabe un gobierno de expertos. En el momento en que cambiamos la perspectiva, el discurso de los participantes cambia. ¿Qué pasa si en la encuesta sometemos esas preguntas sobre los expertos a comparaciones más difíciles?

EXPERTOS, ELECCIONES Y MECANISMOS PARTICIPATIVOS

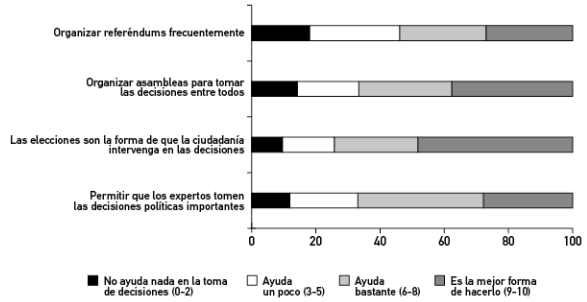
En el anterior epígrafe vimos como las preferencias de la ciudadanía se

inclinaban hacia los expertos al ser preguntados por su conformidad con un gobierno liderado por ellos. Ahora bien, cuando esa forma de gobierno se compara con formas alternativas de toma de decisiones, lo que vamos a ver es que ese apoyo aparente al gobierno experto queda ya mucho más matizado. Eso es lo que ilustra precisamente el gráfico 16. En este caso, nos vamos a quedar con la pregunta que más claramente mide el apoyo al gobierno de los expertos de la selección anterior, pero la comparamos con un conjunto de preguntas con el mismo formato y que representan otras formas alternativas de tomar decisiones colectivas.

La primera constatación es que el apoyo a la democracia representativa cambia radicalmente cuando variamos la formulación de la pregunta. Si en lugar de mencionar a los desprestigiados "gobernantes" ponemos el foco en el mecanismo que la mayor parte de personas sigue considerando esencial en un sistema representativo, las elecciones, nos encontramos que el apoyo a estas es claramente mayor que al gobierno experto: el doble de personas lo valoran como la mejor forma de tomar decisiones (valoración 9-10).

Si la comparación la establecemos con los mecanismos participativos, la distribución de los apoyos no es radicalmente distinta. Por ejemplo, la toma de decisiones por medio de asambleas consigue un número de apoyos incondicionales (valoración 10) bastante mayor que el gobierno experto (30% frente a 20%) y el número de personas que aprueban ambos mecanismos es similar. En el caso de los referéndums, estos siguen teniendo un apoyo total algo mayor a los expertos, pero también tienen más detractores, con lo que su apoyo global sería similar.

GRÁFICO 16
LOS EXPERTOS Y OTRAS FORMAS DE TOMAR DECISIONES

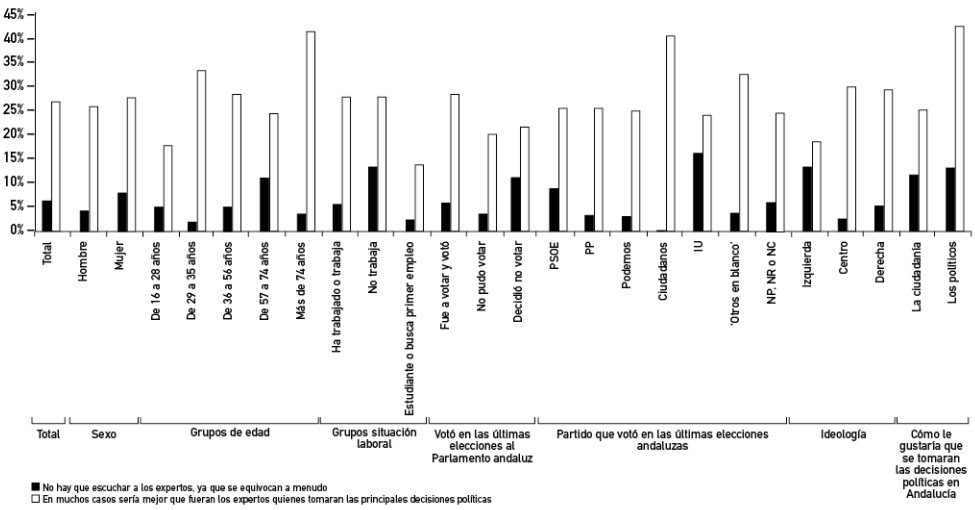


Fuente: PACIS 2015 (IESA/CSIC).

En cualquier caso, la comparación deja claro que el apoyo a las diferentes fórmulas de toma de decisiones está más repartido y que el apoyo a las fórmulas basadas en expertos es menos incondicional de lo que parecía. Quizá, esta aparente contradicción puede comprenderse algo mejor si observamos cuál es el rol preciso que la ciudadanía pretende que estos tengan.

Dado que los participantes en los grupos de discusión habían distinguido con claridad entre consultar a los expertos y que ellos tomaran las decisiones, hemos tratado de explorar si esta distinción aparecía en el conjunto de la opinión pública andaluza. La pregunta, que presenta nítidamente tres opciones (prescindir de los expertos, escucharlos pero que no decidan o que tomen directamente las decisiones), muestra con claridad que efectivamente la posición central (escucharlos) es la mayoritaria (gráfico 17).

GRÁFICO 17
¿QUIÉN APOYA REALMENTE EL GOBIERNO DE LOS EXPERTOS?



Fuente: PACIS 2015 (IESA/CSIC).

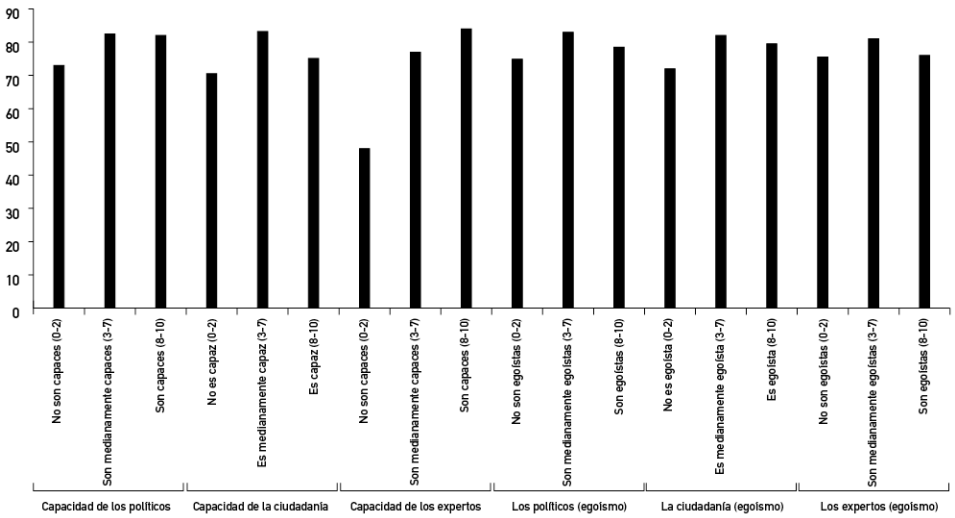
Entre los sectores más reticentes a escuchar a los expertos tenemos a los votantes de IU, las personas de izquierda, las que decidieron no votar en las elecciones autonómicas o las que se encuentran en paro. Por el contrario, en el sector más partidario de un gobierno experto se encuentran muy especialmente las personas más mayores y los votantes de Ciudadanos, los votantes más entusiastas con cualquier fórmula de toma de decisiones poco política, como ha mostrado también el estudio de Lavezzolo y Ramiro (2017).

¿Podemos profundizar en cuáles son los factores explicativos de este apoyo? Para ello construimos una medida única de apoyo al gobierno experto utilizando toda la información disponible[5]. Este indicador será, por tanto, la medida sintética de apoyo al rol de los expertos en el gobierno que utilizaremos en el resto de este apartado.

¿Qué factores nos pueden ayudar a entender ese apoyo? Podemos apuntar tres grandes grupos de posibles factores explicativos. Primero, como apuntan Del Río y sus colegas (2016), las cualidades que la ciudadanía proyecta sobre los que toman las decisiones políticas son un elemento fundamental para entender el papel que se daría a unas figuras o a

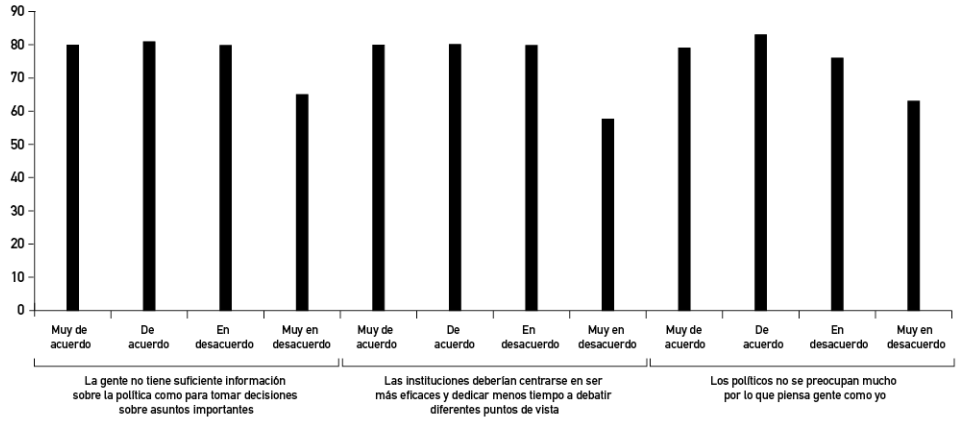
otras. El gráfico 18 nos muestra que dos cualidades (capacidad y egoísmo) son percibidas en tres potenciales "decisores": ciudadanía, políticos y expertos. Vemos que, sobre todo, hay una cualidad de los expertos que es muy importante para apostar por ellos como decisores: su capacidad, lo que provoca que el grupo que considera a los expertos poco capaces sea también el que no quiere ni oír hablar de su protagonismo en la toma de decisiones. Tal como ocurría en los grupos, el deseo de un gobierno experto se une indisolublemente a sus capacidades técnicas. El resto de las relaciones son mucho más débiles, aunque es cierto que también son algo más favorables al gobierno experto aquellas personas que los consideran menos egoístas.

GRÁFICO 18
APOYO AL GOBIERNO EXPERTO EN FUNCIÓN DE CUALIDADES DE LOS POTENCIALES DECISORES



Fuente: PACIS 2015 (IESA/CSIC).

GRÁFICO 19
APOYO AL GOBIERNO EXPERTO EN FUNCIÓN DE ALGUNOS INDICADORES ACTITUDINALES



Fuente: PACIS 2015 (IESA/CSIC).

Un segundo paquete de potenciales factores explicativos de esta actitud hacia los expertos es el conjunto de valores políticos generales que hemos analizado en el primer capítulo de este texto. El gráfico 19 muestra la relación entre algunas actitudes políticas que estudios anteriores han mostrado que podían ser relevantes y nuestra escala de apoyo al gobierno experto. Para cada una de las preguntas encontramos un patrón similar: el grupo de los que están muy en desacuerdo con las frases propuestas es el que más cuestiona la idea del gobierno experto. Es decir, quienes creen que la ciudadanía está capacitada para tomar decisiones importantes, quienes valoran la deliberación y no solo la eficacia y quienes confían en cierta capacidad de ser escuchados (como ciudadanos) por los políticos están más en desacuerdo con un gobierno de expertos.

Si consideramos todas estas variables simultáneamente, les añadimos además educación y algunas variables políticas, como ideología y, siguiendo a Lavezzolo y Ramiro (2017), voto a Ciudadanos, nos encontramos con la misma idea central que ya hemos apuntado, una variable destaca muy por encima de todas las demás: la percepción de la capacidad de los expertos. Un individuo que tenga los valores de las restantes variables a ‘0’ y que conceda también un ‘0’ a la capacidad de los expertos, tendrá un ‘2,7’ en la escala (0-10) de apoyo al protagonismo

político de los expertos. Si esa misma persona concede un '5' a la capacidad de los expertos, su apoyo a dicho protagonismo político crecerá hasta el '4,8', y si los considera extremadamente capaces y les da un '10', su apoyo a darles mucho poder va a ser ya del '6,9', lo que indica una enorme capacidad de influencia de esa valoración.

Además de la percepción que tiene la ciudadanía sobre las cualidades de los expertos, otras tres variables son también importantes, aunque su capacidad explicativa sea bastante menor. En primer lugar, los votantes de Ciudadanos son más favorables al gobierno experto que el resto de la ciudadanía. En segundo lugar, quienes piensan que "la política es demasiado difícil para la gente como ellos", también apoyan más esta idea. Y, finalmente, quienes eligen que prefieren representación a participación también se muestran más favorables. Por el contrario, todas las demás variables no tienen un efecto significativo sobre la preferencia de un modelo político liderado por los expertos. Ninguna de las demás capacidades (ni el egoísmo percibido de los expertos) importa; como tampoco lo hace la opción por la eficacia, el ser de izquierdas, la confianza política o el nivel de estudios. En definitiva, es sobre todo nuestra creencia en la capacidad de los expertos la que influye decisivamente en que queramos que estos tengan un importante protagonismo en la toma de decisiones políticas.

Como hemos podido observar, tampoco un gobierno de expertos es una idea que genere apoyos unánimes entre la ciudadanía. Hay una parte importante de los participantes en los grupos que plantea un mayor protagonismo de los expertos, en detrimento de los políticos, pero se rechaza radicalmente un gobierno liderado por ellos. La crisis política ha hecho que mucha gente tenga sentimientos muy negativos hacia la política, pero estos sentimientos no se han traducido en alternativas políticas claras

al sistema representativo. ¿Quiere esto decir que la ciudadanía se resigna? Ni mucho menos, pero el foco de las reformas políticas no mira hacia procesos políticos distintos, sino hacia dentro del mismo sistema representativo. Será allí donde la ciudadanía piense la aplicación de un modelo mixto, que recoja el espíritu político de una mayor participación y una mejor preparación de los representantes. En el siguiente capítulo reflexionamos sobre las reformas políticas imaginadas por la ciudadanía.

CAPÍTULO 5

¿Y ENTONCES, QUÉ? LAS REFORMAS POLÍTICAS IMAGINADAS

El objetivo de este trabajo respondía a una aparente contradicción en términos políticos: cómo en un momento en el que la ciudadanía muestra más interés por la política que nunca, a la vez se alcanzan los niveles más altos de insatisfacción con la democracia. La investigación se preguntaba entonces si esa aparente paradoja desafiaba el sistema político representativo y, en caso de hacerlo, en qué sentido lo hacía. A lo largo del trabajo hemos visto que el descontento está muy marcado por el funcionamiento de los partidos políticos, que son considerados las figuras claves de la democracia. Su mal funcionamiento despierta así una crítica mordaz por básicamente todos los grupos de discusión. La crítica realizada a los partidos se fundamenta en sus lógicas de funcionamiento, más que en las malas intenciones de personas o políticos concretos. Los partidos políticos son, en consecuencia, descritos por la mayoría como órganos endogámicos, cerrados a la sociedad y su influencia, que además justifican su existencia a partir de relaciones de lealtad. Estas relaciones orientarían los partidos hacia intereses espurios, que son los intereses particulares de los representantes políticos que favorecen el "clientelismo", en lugar de los intereses de la comunidad o los intereses colectivos. Esto impide para muchos participantes que se haga buena política y que gobiernen los mejores políticos. Ahora bien, hablar de lo que no funciona siempre es más fácil que hablar de cómo podría funcionar de otra manera.

A lo largo del trabajo hemos observado que la crítica al funcionamiento de la democracia implica para muchas personas elementos más participativos, articulados, eso sí, con las instituciones representativas. Igualmente, vimos que la crítica no implicaba para la mayoría de la ciudadanía dar un salto institucional hacia gobiernos liderados por expertos, aunque se acepte que estos tendrían que tener una presencia en los gobiernos y que el mérito, como criterio que garantiza las capacidades profesionales, debería demandarse en la esfera política. Las razones por las que se piensa tanto una cosa como la otra refuerzan la idea de llevar la política a un lugar público, que se pueda justificar a partir de razones cívicas y de interés general. Lo que cada uno entiende por interés general y razones cívicas, por supuesto, no es a veces ni siquiera compatible. Ahora bien, lo que sabemos es que la paradoja señalada más arriba no desafía de forma radical el sistema representativo, pero tampoco se acepta el *statu quo* actual. La ciudadanía parece inclinarse por reformar las relaciones de representación.

Hablar sobre las reformas políticas como si fueran proyectos concretos representa siempre un desafío cognitivo. Hay que pensar en las consecuencias prácticas que tendrían una medida y otra, lo cual llena el debate de matices e incoherencias. La información que detallamos ahora hay que leerla con esta precaución. No se trata de examinar las reformas como propuestas reflexionadas sosegadamente por los participantes en nuestra investigación, sino como respuestas a los problemas políticos más graves que han identificado en el trascurso de los debates. Son estos problemas los que llevan a los participantes a hablar de estas posibles alternativas, por lo que no podemos interpretarlas como parte de un esquema compacto y coherente de reformas políticas, aunque nos van a ofrecer una idea de por dónde ven los ciudadanos que tiene que evolucionar

el sistema político. ¿De qué hablan, entonces, los grupos de discusión en estas conversaciones para solucionar los problemas de la política representativa?

EL CONTEXTO: ¿POR QUÉ SE HABLA MÁS DE POLÍTICA?

A lo largo de los grupos de discusión, los participantes hacen referencias constantes al tiempo político que se vive. El contexto en el que se realizó el trabajo de campo era entre junio y diciembre del año 2015, después de las elecciones andaluzas (marzo de 2015) y municipales (mayo de 2015) y antes de las elecciones generales del mes de diciembre de 2015. Era un año eminentemente electoral, por lo que resultaba imposible ignorarlo. Por eso, creemos que resultará ilustrativo mostrar cómo los diferentes grupos de discusión interpretaban esa época que, como hemos visto a lo largo de los capítulos anteriores, se mete de lleno en los debates entre los participantes. Desde el punto de vista de las encuestas de opinión pública, es un tiempo en el que la gente ha incrementado notablemente la conversación política. ¿Por qué se ha producido este incremento? Las respuestas de los diferentes grupos a esta cuestión nos ofrecen una información valiosa para entender mejor el contexto de cambio que se vive.

La primera diferencia notable en el debate entre los participantes de los diferentes grupos alrededor de esta cuestión descansa en el valor que se da a los cambios políticos actuales. Si es cierto que ningún grupo deja de mencionar a lo largo de sus conversaciones un contexto político distinto, principalmente por la aparición de dos partidos políticos nuevos, resulta ilustrativo cómo unos grupos intentan relativizar esos cambios, mientras otros los asumen como propios. En uno de los lados podríamos situar a los grupos de los partidos tradicionales PSOE y PP [gp1 y gp2], que junto al grupo de los trabajadores cualificados y los mayores [gsc1 y gsc6] desinflan

estos aires de cambio político. Son "tiempos de diversidad", dicen en el grupo de los simpatizantes socialistas [gp1], "se protesta más" y "la gente está más enfadada", dirán los simpatizantes populares [gp2]. Pero para ambos grupos eso no quiere decir que haya más interés por la política, ni, por supuesto, que estos tiempos sean más genuinos. El problema real para estos grupos es la corrupción en los partidos tradicionales que, según los trabajadores cualificados, habría arruinado ideológicamente el país [gsc1]. Para ellos, sería esta corrupción sistémica la que habría dado alas a los nuevos partidos [gp1; gp2; gsc1], que han sabido aprovechar la situación a su favor. No se critica que ellos hayan aprovechado el momento, pero se proyecta hacia los nuevos un aire de oportunismo que rebaja en seguida las expectativas sobre su papel en un supuesto contexto de cambio. Como comenta un participante en el grupo de los socialistas, "se creen dioses" [gp1].

Para estos grupos, el incremento de la conversación política en la calle no se debe tanto a la llegada de un nuevo tiempo como a la televisión. Sería esta, y no las protestas ni el movimiento de los indignados ni el incremento de las movilizaciones sociales, la responsable del incremento de la conversación política. Para muchos grupos, la televisión permite relativizar el éxito de los nuevos partidos. El grupo de los mayores plantea el mismo problema, se habla de política porque la televisión habla mucho de esas cosas, pero, puntualizan, de lo que se habla es de corrupción, no de política [gsc6]. De una u otra manera, estos grupos desinflan los tiempos políticos que se viven. Para ellos, el gran problema es la economía y lo mal que lo han hecho los partidos políticos al respecto. Todo ello se dirige a rebajar la novedad, a disminuir el impacto de los nuevos partidos y las protestas del año 2011. Esta tarea la realizan especialmente los simpatizantes socialistas, que llenan sus conversaciones de referencias negativas al 15M y los nuevos

partidos. El movimiento de los indignados es descalificado al compararlo negativamente con el movimiento del 68, que sí era para ellos un movimiento intelectual, a diferencia del 15M [gp1]. De esta manera, la protesta adquiere para ellos un sentido más material, más prosaico. El problema es que la crisis y las instituciones políticas han abandonado a la gente y "eso ha sido un caldo de cultivo para el 15M u otro tipo de iniciativas" [gp1]. En definitiva, estos grupos no perciben el nuevo contexto político como algo necesariamente positivo: "El que haya más actores en principio no significa que la obra de teatro vaya a ser mejor" [gp1].

Los grupos que podríamos situar en el lado opuesto, que son los simpatizantes de los nuevos partidos [gp3 y gp4], más los jóvenes [gsc3 y gsc4] y, en cierta manera, los trabajadores precarios [gsc2] y los miembros de asociaciones altermundistas [gsc5] ponen como punto de referencia de los cambios políticos entre la ciudadanía las protestas del 15M. Los nuevos aires políticos comienzan allí, "ese fue el principio del cambio", dirán los jóvenes sin estudios [gsc4]. Los jóvenes universitarios son menos entusiastas con el 15M, pero son unos entusiastas de los nuevos tiempos políticos: "¿Qué saco de positivo del sistema político ahora? Que hay muchos partidos, que estamos intentando quitarnos de esa dualidad de la muerte que nos va a llevar a…" [gsc3]. Los trabajadores más precarios reconocen al unísono que el 15M "algo removió", [gsc2] e incluso alguno de los participantes piensa que haría falta otro: "Yo haría otro 15M de esos ahora mismo" [gsc2]. Pero es cierto que en este grupo la referencia es más superficial. Los altermundistas son los mayores defensores del 15M como fenómeno clave de los nuevos tiempos políticos, "ha hecho muchísimo" [gsc5], sobre todo, porque la protesta permitió que mucha gente perdiera el miedo a hablar [gsc5]. Por supuesto, los simpatizantes de Podemos colocan el 15M como "la chispa" [gp4], "el desencadenante" [gp4], aunque su

influencia se relativiza en favor del nuevo partido: “Pero realmente donde se ha pegado el pelotazo fue el año pasado con el movimiento Podemos” [gp4]. Para Ciudadanos, el propio partido fue impulsado por el 15M [gp3] y los nuevos tiempos políticos beben de allí: “El hecho de que hayan surgido nuevos partidos era la consecuencia lógica de ese movimiento que se dio en el 15M” [gp3].

Estos grupos tienen otra visión sobre el incremento de la conversación política entre la ciudadanía. Para ellos hay algo nuevo y diferente que se refleja en un aumento de la agencia política de la ciudadanía. La intensidad de estos cambios no es igual para todos. Por ejemplo, son casi imperceptibles en el grupo de trabajadores precarios o los jóvenes sin estudios, cuyos argumentos giran más alrededor de la penuria económica: “La gente habla de política porque se han visto abajo, antes no le faltaba de nada” [gsc3]. Hay una pérdida de “dignidad” según los trabajadores precarios. Para el resto de los grupos, el 15M y el contexto actual plantean un cambio político sustantivo. No solo se habla más de política (“en la frutería la gente habla de calor y de política” [gsc5]), sino que se ha generado un activismo que ha hecho a la gente engancharse a la política porque ahora piensa que los cambios son posibles. Para uno de los participantes en el grupo de Ciudadanos se ha pasado “de no creer en nada” a pensar que es posible cambiar cosas [gp3]. Para los altermundistas, el 15M “lo que ha provocado es que gente que no estaba politizada, pues mire las instituciones como un lugar donde puede transformar la realidad social” [gsc5].

El caso de los simpatizantes de Podemos es más ambiguo a este respecto. Reconocen, por supuesto, la importancia de las protestas del año 2011 en el nuevo contexto político, aunque siempre se privilegia la fecha de fundación del partido (enero de 2014). La justificación de este incremento de la

conversación y el interés político está a medio camino entre los partidos más tradicionales y los que acabamos de ver. Frente a los más optimistas, que perciben que la gente ha ganado más capacidad de influencia, ellos contextualizan el incremento del interés por la política en un escenario también televisivo. Los programas televisivos son espectaculares y entretienen, pero el problema para ellos es que la gente no sale del salón de su casa para participar e implicarse. Desde este punto de vista, los simpatizantes de Podemos relativizan los cambios sucedidos. Ha servido para recuperar la ilusión de los que la habían perdido, pero persiste "la apatía todavía" [gp4].

Estas visiones diferentes influirán en el modo en que se conciben los cambios políticos, sobre todo, las herramientas que se conciben para dar el salto de esa esfera doméstica y privada a una esfera cívica y pública.

REFORMAS EN EL SISTEMA REPRESENTATIVO

En el universo político de los participantes en los grupos de discusión, las reformas políticas pueden dividirse en dos grandes tipos, las cuales responden a grupos de discusión distintos. La primera tiene siempre una misma dirección: sanear el funcionamiento de los partidos y acercar la política a la sociedad. Ambas cuestiones se abordan de forma simultánea, mediante propuestas concretas destinadas a mejorar las relaciones institucionales hacia dentro de los partidos y sus relaciones hacia fuera con la sociedad. El segundo tipo de reformas toma un camino distinto, que se orienta básicamente a simplificar los mecanismos políticos. Veamos en primer lugar qué significa acercar la política a la sociedad y cómo se imaginan los participantes ese objetivo.

ACERCAR Y ABRIR LA POLÍTICA

Dentro de los grupos que abordan las reformas desde esta perspectiva

podemos diferenciar dos formas distintas. Por un lado, estarían los grupos más conservadores (simpatizantes del PP y Ciudadanos, junto a los trabajadores cualificados y los estudiantes universitarios). Por el otro lado, estarían los grupos más progresistas (simpatizantes de Podemos e IU y miembros de asociaciones altermundistas). El grupo de los simpatizantes del PSOE se quedaría a medio camino entre unas reformas y otras.

LAS REFORMAS CONSERVADORAS: ABRIR PARTIDOS Y CERRAR ORGANISMOS

Los grupos más conservadores posiblemente sean los grupos más críticos con el desempeño de los partidos políticos. Para ellos, el funcionamiento de los partidos es el que ha causado la crisis y, por ello, las reformas sugeridas se dirigen a abrir los partidos hacia fuera con el objetivo de neutralizar las relaciones de lealtad que vertebran su funcionamiento. Además, proponen establecer nuevos canales de comunicación con la ciudadanía, que permitan que su voz sea escuchada por parte de los representantes. Pero aquí no se habla tanto de participación ciudadana (como sí harán los simpatizantes socialistas y los grupos más progresistas) como de nuevas instituciones políticas de representación. Todo ello en un escenario inclinado para estos grupos a resaltar las tareas ejecutivas de los gobiernos, donde los técnicos tendrían más autoridad.

¿Cómo se abren los partidos hacia fuera? En términos generales se plantean dos grandes reformas: 1) las listas abiertas y 2) la obligación de hacer primarias para elegir a los líderes del partido. Si bien la primera reforma aparece mencionada en los tres grupos, la segunda no aparece en el grupo de los simpatizantes del PP. Las listas abiertas y las primarias contribuirían a “democratizar” los partidos y salvarían una institución que está en crisis. Ambas medidas son poco debatidas entre los participantes, pero hay cierta diferencia entre los grupos. Los simpatizantes de Ciudada-

nos no cuestionan ninguna, pero en los otros dos grupos se discute más la adecuación de esas medidas, sobre todo las listas abiertas, que no terminan de convertirse en una medida consensuada entre los participantes. Entre los participantes del PP, la propuesta levanta un airado debate sobre si hay una cultura política suficiente para implantarlas: "Yo no estoy ni a favor ni en contra. Yo la pega que le veo es que cualquiera entonces, la sociedad es muy manipulable, entonces a lo mejor una persona que la sociedad está descontenta y tal, y llega cualquiera que le puede comer el tarro a muchísima gente y puede llegar al poder gente que a lo mejor ni está preparada" [gp2]. El tema no se cierra y deriva hacia la falta de profesionalización de los representantes. La defensa de las listas abiertas dentro del grupo de los populares y trabajadores cualificados se hace recordando que la votación de senadores adopta ya esa lógica [gsc1; gp2], por tanto, los participantes a favor de ellas quieren mostrar a sus interlocutores que no habría un salto enorme en su implementación.

El otro gran problema que afrontan los sistemas representativos es el de su aislamiento respecto a la sociedad. Si es necesario abrir los partidos hacia fuera para que los representantes estén más vinculados a sus votantes, habría que hacer lo mismo con las instituciones políticas, que se han aislado de la sociedad civil. Lo extraño del asunto es que estos grupos son los que menos importancia dan a la participación ciudadana. En este sentido, su idea de reforma tiene que ver más con el diseño de nuevas instituciones, que planteen una relación de representación diferente. Los tres grupos mencionados aluden, con distintos nombres, a la elección de los diputados por distritos que tiene lugar en el Reino Unido [gp2; gp3; gsc1]. Igual que pasaba con las listas abiertas, no es una reforma pensada concienzudamente. En el grupo de los trabajadores cualificados y simpatizantes del PP se menciona de pasada, con la idea de mostrar lo

bueno que sería, la identificación del representante con sus votantes: “En cambio yo tengo entendido que en otros países, en el Reino Unido por ejemplo, el concejal del barrio, el diputado, está todos los viernes recibiendo a la gente de su circunscripción para ver qué… y bueno les importa y son la voz de sus representados. Aquí no, aquí son la voz de sus partidos” [gp2]. Pero es de nuevo en el grupo de Ciudadanos en el que encontramos mejores referencias. A raíz de una discusión acerca de la adecuación de los referéndums como mecanismo político, que suscitó una gran controversia entre los que apostaban por él y los que no, una participante menciona este mecanismo anglosajón como alternativa, lo que facilitó el consenso entre el resto de los participantes. Al fin y al cabo, la medida se plantea en los mismos términos que el referéndum, como un mecanismo que acerque la política a la sociedad:

> Yo creo que, además de… del referéndum hay otra forma de acercar a los ciudadanos a la política. Y sería… eh, como se hace en Inglaterra por ejemplo, que además de los diputados que hay en el Congreso, haya también representantes de Distrito, de manera que sería muchísimo más fácil que tú, si tienes un problema como ciudadano, puedas acercarte a tu representante de Distrito y que este lleve tu problema a la institución que sea necesario. Entonces, es verdad que ahora parece que están las instituciones —sobre todo el… Congreso y el Senado— muy desconectados de los ciudadanos y de los problemas que tienen a diario, pero se podría solucionar de esta forma [gp3].

También es frecuente en estos grupos mencionar el “exceso de instituciones” o “burocracia” [gp2] que generan “duplicidades” [gp3]. Lo expresa muy bien un participante en el grupo del PP: “Quiero decir, no es lógico que un pueblo tenga un concejal de urbanismo, la Diputación tenga un concejal de urbanismo, la JJ AA tenga un concejal de urbanismo y el gobierno tenga un delegado de urbanismo. Todo eso con las mismas funciones en el mismo territorio… Me parece una barbaridad, un esfuerzo y un costo bestial” [gp2]. Las duplicidades son además una especie de agujero negro para la corrupción: “Que yo pienso que tenemos tal burocracia que eso es caldo de cultivo para la… para lo que es la

corrupción" [gp3]. La estrella de este recorte burocrático son las diputaciones provinciales, que concentran todos los males que se han ido detallando, como muestran estos dos fragmentos de participantes del grupo del PP y Ciudadanos:

> Que al final las diputaciones, no nos olvidemos, y determinados organismos, son el coladero de personas que no han sido votadas en las elecciones y como son amiguitos de… o del partido cuál, los tienen que colocar [gp2].

> Entonces, la Administración que tenemos hoy en día, que existen competencias que se solapan unas con otras; las diputaciones, que me parece… se elige mucha gente que trabaja allí a dedo [gp3].

A pesar de la separación radical que establecen entre el área técnica y política en un gobierno, los discursos de estos grupos tienen como objetivo ampliar la autoridad de los expertos y menguar la de los políticos. Ya vimos en otro capítulo que precisamente son estos grupos los que ven que la política ha conquistado parcelas técnicas de gestión, cuando debería ser al contrario. La pugna por introducir el mérito en la esfera política en estos grupos significa separar bien los tres poderes, por ejemplo, despolitizando la justicia [gp2; gp3], pero, sobre todo, significa despolitizar las áreas de gestión técnica en las administraciones, lo que supondría eliminar cargos políticos de confianza. El grupo de trabajadores cualificados es el más intenso a este respecto: "A las CC AA recortaría muchísimos negociados… y dejaría muchos en manos de gestores funcionarios. ¿Para qué necesitamos tanto político para mover el mecanismo del Estado si hay unos funcionarios estupendos y preparados y fenomenales que pueden hacer eso? No tienen por qué ser políticos de confianza de nadie" [gsc1].

En definitiva, estos grupos plantean una reforma de los partidos que los abra hacia fuera, creando nuevas instituciones que canalicen mejor la voz de los ciudadanos hacia la política. A su vez, aprecian que una parte importante del problema es que el diseño de las administraciones permite la corrupción y el amiguismo, por lo que sus reformas van dirigidas a eliminar

instituciones sobrantes, lo que implicaría una recentralización de los servicios públicos [gp3] y una gestión de los mismos bajo criterio y supervisión de los expertos que ya están en las administraciones.

LAS REFORMAS SOCIALISTAS: ABRIR PARTIDOS Y REFORMAR LAS INSTITUCIONES

Las reformas que piensan los simpatizantes del grupo del Partido Socialista tienen muchas cosas en común con las reformas que acabamos de describir. Su preocupación es muy similar, "la profesionalización" de la política [gp1]. Es a partir de ella como los participantes en este grupo piensan las reformas que puedan mejorar el sistema político. Pero entre los participantes hay un giro del problema que tiene fuertes implicaciones. Si la mayoría de los otros grupos plantean una crítica sin paliativos a los partidos políticos como causantes de la crisis política experimentada, entre los participantes de este grupo, sin devaluar el problema de los partidos, se incluye también a la ciudadanía. La crítica va dirigida a la ciudadanía como sujeto político que, al igual que los partidos, no ha hecho bien su trabajo. No se minusvalora la participación, pero tampoco se invocan nuevas instituciones de representación. Para ellos, los mecanismos ya están, pero funcionan mal, como les ocurre a los partidos políticos. De esta manera, los problemas que pretenden solucionar son similares a los de los grupos más conservadores (la apertura de los partidos y la instauración de nuevos canales de comunicación con la ciudadanía), pero se replantea el enfoque.

Este diagnóstico de los simpatizantes socialistas habla de mejorar los mecanismos de representación para que los mejores políticos tengan la oportunidad de salir y se pare la sangría causada por la corrupción y el amiguismo. ¿Qué reformas se plantean los participantes de este grupo para solucionar estos problemas? En primer lugar, hablan de la limitación de mandatos. Pero, como pasaba en los grupos conservadores, no todas las

propuestas son compartidas. En este caso se abre una controversia notable. Los que están a favor defienden que la experiencia adquirida en la gestión pública, si se ha hecho bien, es un valor, mientras quienes la rechazan invocan la necesidad de cortar los lazos de dependencia laboral con los puestos públicos [gp1]. Además de las primarias abiertas, como sugerían los grupos conservadores, se mencionan dos cosas nuevas: la necesidad de revisar la financiación de los partidos [gp1] y reformar el régimen de incompatibilidades de los representantes [gp1]. La reforma de la comunicación con la sociedad es una cuestión mucho menos tratada por los participantes socialistas. Eso no quiere decir que no sean importantes para ellos los canales de comunicación con la ciudadanía, sino sencillamente que casi todos piensan que hay canales de sobra. Mencionan a este respecto el diputado 110 que instauró la Junta de Andalucía en su último Estatuto como un mecanismo viable y que podía difundirse por los municipios [gp1].

Insisten en reformar los mismos organismos, el Senado y las diputaciones. La primera, para que se convierta en una verdadera cámara territorial [gp1] y la segunda, porque ha perdido parte de sus funciones. Las reformas de los simpatizantes del Partido Socialista están a medio camino entre las propuestas conservadoras y las de los grupos más progresistas, que veremos a continuación. A pesar de compartir el problema de la profesionalización de la política, sus propuestas no siguen la misma estela dibujada por los grupos conservadores. Están lejos de sugerir un adelgazamiento de las administraciones y mucho menos hablan de conceder más autoridad a los expertos. La separación entre política y técnica para ellos es además radical, siempre en una relación jerárquica. Ellos piensan que la corrupción y el amiguismo se pueden solucionar mejorando las normas. Hay en todo ello un negarse a aceptar que toda la culpa la tienen los partidos, como hacían los grupos conservadores, sin rechazar, por

supuesto, que los partidos deberían transformarse.

LAS REFORMAS PROGRESISTAS: ABRIR INSTITUCIONES

Los grupos más progresistas piensan que hay que acercar las instituciones políticas a la ciudadanía. Lo que estos grupos pretenden es dar mayor protagonismo a la ciudadanía, aunque siempre dentro de las relaciones de representación. Es cierto que las conversaciones en ambos grupos están pobladas de mecanismos, ideas y acciones que dibujan siempre un recorrido de abajo arriba, como si se quisiera con ello instaurar esa direccionalidad en el sistema político. Pero no deja de ser paradójico que unos grupos, que en teoría se podía pensar que estuvieran inclinados a dar mucho protagonismo al ciudadano mediante procesos directos de toma de decisiones, sean los que más lejos lleven las reformas de la representación precisamente a mejorar el sistema, aunque adaptado a lo que ellos entienden que demandan los nuevos tiempos.

Uno de los temas que abordan es, precisamente, el mismo que llevaba a los grupos conservadores a mencionar los diputados de distrito de Reino Unido: la lejanía entre los representantes y la ciudadanía. Estos dos grupos mencionan un mecanismo similar, aunque aquí lo importante es la representación municipal, en el sentido de vivencia o escala en la que la gente vive. Sería a partir de esa escala desde la que podríamos pensar una representación en escenarios superiores, pero siempre desde el municipio. No se trataría de votar un representante en el distrito que fuera a pelearse a los foros nacionales, sino que fueran los representantes municipales los que, de alguna manera, vertebraran la política nacional. La propuesta concreta es difusa, pero retrata bien un escenario utópico, aún sin articular, en el que se demanda más protagonismo de la gente y donde, como en los grupos más conservadores, el territorio más cercano aparece como una pieza clave en las lógicas representativas. El grupo de altermundistas es más claro y

contundente con esta idea. Para ellos, el municipio significa el espacio donde la gente vive, donde tienen sus problemas y donde se deberían discutir las soluciones. Al hilo de una conversación sobre la participación de la ciudadanía, una participante lo resume de forma sencilla:

> También eso sea posible que pase en lo local, ¿no? O sea, que yo participe en la Unión Europea… puf, podíamos empezar por los ayuntamientos, ¿no? Por acercar el *ayunta*, y claro, para eso el Ayuntamiento tiene que tener más poder, es que es la institución más cercana que tenemos. Eso al final podría llegar, pero el poder tiene que estar en lo local, no digo que haya una descoordinación total, no. Luego… Pero si realmente queremos que sea el pueblo el que pueda tener una participación real y no solo de consulta y tal pues tiene que ser en lo cercano [gsc5].

El punto de partida de ambos grupos es que la lógica con la que funcionan las instituciones no resuelve los problemas de la gente. Para ello, la reforma propuesta sería instaurar la revocación de los cargos institucionales entre elecciones:

> Pero el problema no solamente es de representatividad de los partidos ni de la labor que hacen, sino de cómo está construida la institución que recibe esos partidos cada x años. Si hubiera mecanismos en el que la población igual que vota cada 4 años puede destituir directamente a un gobierno que lo está haciendo mal, por mucha ley... por muy partido que sea, automáticamente caería; el problema es institucional también, no solamente representativo de la gente que está ahí, que por supuesto. Hemos llegado a la profesionalización de la política y es el chollo de la vida [gp4].

La revocación de los cargos institucionales no es ni mucho menos concretada, pero da una idea de por dónde se orientan las reformas para mejorar el funcionamiento de los partidos. No se debaten más reformas, ni las listas abiertas, ni las primarias, ni la financiación de los partidos, como hacían los socialistas.

Ambos grupos son, a su vez, los que debaten más acerca de la instauración de mecanismos participativos, aunque siempre, al final, con matizaciones parecidas al resto de los grupos. Esto es, en ningún momento plantean reformas radicales en detrimento de la representación, aunque sugieren, de forma más contundente que los participantes socialistas, la presencia de mecanismos directos de participación que funcionen. En el

grupo de Podemos e IU, un participante habla incluso de la "desrepresentación" [gp4] como una forma de diluir los poderes centralizados de las elites entre la ciudadanía. Este es un concepto nuevo (Jurado, 2015), puesto de moda en los círculos más activistas del 15M, que viene a diluir la representación de las elites en una especie de microrrepresentación multitudinaria. En el grupo de altermundistas, el debate sobre las reformas es más difuso y más corto. No se concretan bien los mecanismos que pudieran dar más protagonismo a la vida en los municipios y una representación de abajo arriba. Después, sus propuestas van destinadas a poner de relevancia el papel que pueden desempeñar los movimientos sociales en general [gsc5], la mejora de los canales participativos existentes, porque al final no tienen influencia real y aparecen ante la ciudadanía como procesos "aburridos" [gsc5].

El grupo de Podemos e IU, al igual que el resto de los grupos, reformaría el Senado adaptándolo a esa realidad plurinacional invocada, que demanda una verdadera cámara territorial [gp4]. Igualmente reformarían "instituciones obsoletas", como las diputaciones [gp4]. La diferencia con los grupos conservadores, y al igual que hacían los socialistas, es que ellos no vinculan el número de instituciones a una extensión de las prácticas corruptas. Los grupos progresistas piensan las reformas desde un escenario similar al grupo de los socialistas, las reformas propuestas se orientan a mejorar las instituciones existentes desde una mejora de la representación, pero en este caso, no se hacen depender únicamente del diseño de nuevas instituciones representativas, sino dando más poder a la ciudadanía sobre los representantes políticos.

LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS: ELEGIR MEJOR

Los jóvenes universitarios presentan un perfil ante las reformas muy ecléctico y sus propuestas pueden incluso ser consideradas contradictorias

entre sí. Por un lado, aceptarían, con los grupos conservadores, aligerar o adelgazar las administraciones [gsc3]. Para ellos hay un exceso de políticos, pero a pesar de este esfuerzo reformista por adelgazar las administraciones, hay un debate notable entre ellos para definir el diseño del Estado. Para ellos también es importante la idea de incrementar la participación: la elección de los gobernantes por parte de la ciudadanía es el principio mínimo de una democracia, pero esto puede significar también la elección de las políticas públicas, no solo los gobernantes [gsc3].

La novedad de las reformas de los estudiantes se encuentra en la forma de plantear la elección de los representantes. Ellos no van a hablar de ninguna de las reformas mencionadas en los otros grupos destinadas a neutralizar las relaciones de lealtad (listas abiertas, primarias, incompatibilidades, etc.). Pero sí que sugieren un control de los representantes, mediante el procedimiento que sirve para seleccionar a los expertos: las oposiciones. El problema del que parten es la dificultad que trae consigo la tarea de gobernar. Dado que el actual sistema ha permitido que políticos malos alcancen el poder, primero se sugiere que gobiernen los expertos. El dilema del gobierno de los expertos es superado porque se trataría de que fueran elegidos por la ciudadanía, no de que gobernara el más capacitado: "Se mete en una urna a los más capacitados en cada campo —a los que más hayan llamado la atención— y después que el pueblo elija" [gsc3]. Para los estudiantes, lo más importante es que el Gobierno sea elegido por la ciudadanía y que llegue al Gobierno una persona capacitada. Por tanto, en la conversación van derivando hacia un sistema de oposiciones para los representantes políticos. Un sistema, en fin, que buscaría seleccionar "a los más cualificados y de entre los más cualificados, el pueblo elije" [gsc3: 39]. Esta deriva tecnocrática de los estudiantes casa bien con sus ideas de aligerar las administraciones, pero es algo

contradictoria con su inclinación por dar más protagonismo a la ciudadanía.

LA SIMPLIFICACIÓN DE LA POLÍTICA

Los grupos más representativos de este tipo de reformas son los más vulnerables y con menos recursos (trabajadores precarios, jóvenes sin estudios y los mayores). El debate de estos grupos está marcado por una realidad económica dura, que puebla sus discursos de injusticias. Ellos, relatan, trabajan mucho y no reciben casi nada. La política aparece por eso muy lejana, como un asunto de "privilegiados" que pueden sobrevivir bien, sin tanta faena como ellos hacen. No hay un análisis sobre la profesionalización de la política, ni tampoco se plantean que la solución sería acercarla a donde vive la gente o crear nuevos mecanismos. Todo lo contrario, la política cuanto más lejos se ubique, mejor.

Las reformas que se discuten en este contexto siempre se orientan a simplificar los mecanismos políticos. En los debates que tienen, la política es un mal menor, pero en un mundo ideal sería prescindible [gsc2; gsc6]. La política tiene tanto descrédito entre los participantes que su mejor baza es simplificarla. Disminuir la dimensión de la política tiene un objetivo, que es liberar más recursos para las cosas importantes, ayudar a los menos privilegiados a sostenerse. No importa que sea el rey [gsc2] o una comunidad autónoma [gsc2; gsc6] lo que se elimine.

La simplificación de los mecanismos políticos implica, como en los grupos más conservadores, una recentralización de los recursos. Pero en este caso se piensa en una idea de la autoridad política del "jefe". La existencia de muchos organismos y muchos políticos desafía el orden jerárquico, lo que dificulta el "control" y favorece el "despilfarro". No es extraño que sea en estos grupos en los que aparece más mencionada la autoridad del régimen de Franco, y no solo en el grupo de los mayores

[gsc2; gsc6].

Las reformas imaginadas se pueden resumir así en un escenario en el que haya políticos "honestos". Si tiene que haber instituciones políticas, "tiene que haber un representante pero siempre que sea honrado y honesto" [gsc4]. ¿Realmente no hay personas honestas? Los grupos de mayores y jóvenes aún "salvan" a determinadas personas, que no están en la política, pero existen. Hay coincidencia en pensar la profesión política como "vocación" [gsc2], de una forma mucho más intensa y contundente que en el resto de los grupos de discusión. La persona en cuestión sería un "jefe" que cumple con sus obligaciones y es capaz de generar trabajo para los demás [gsc6]. Lo primero que habría que hacer, según los trabajadores precarios y los mayores, sería reducir su sueldo o establecer un máximo [gsc6], que, en el caso del grupo de los trabajadores, un participante lo estima en "1.000 euros" [gsc2]. La cantidad es simbólica, pero en el debate dentro del grupo, hacer mileuristas a los representantes significaba desterrar de la política la posibilidad de enriquecerse, quitar todos los "privilegios" [gsc2]. La consecuencia lógica de este horizonte, la de que no se pueden presentar más que las personas que tengan ya dinero, no es una rémora, sino todo lo contrario. Si ya tienen dinero, no tendrán incentivos para "robar" [gsc2].

Uno de los ejes básicos de estos grupos en torno a la política descansa en la desigualdad de oportunidades. Todo el discurso sobre la vocación, la limitación del sueldo y la honestidad tiene como respaldo la eliminación de los privilegios de una clase (política) que es vista como egoísta, oportunista y fanfarrona. Hay una simplificación exagerada de las tareas que un político tendría que hacer, lo que permite que siempre sobrevuele en sus conversaciones la idea de que el mérito no es necesario. No obstante, el grupo de los mayores, partiendo de un escenario similar, se plantea la cuestión del mérito y la política de otra forma y aparece la idea de un

comité de control sobre los representantes, que impondría límites al gasto de los políticos y fiscalizaría todas sus acciones.

El debate entre los participantes de estos grupos plantea la posibilidad de reformar la política en un horizonte más moral que procedimental. Resulta paradójico que unos grupos castigados por la severidad de la crisis reparen tanto en esas cuestiones. Esto denota un cansancio general hacia la política y una pérdida de confianza radical en las instituciones políticas. Su mensaje viene a decir que no se puede esperar mucho de la política, que incluso los nuevos son iguales que los anteriores [gsc6], por lo que cada cual deberá salir como pueda.

LA FIGURA DEL 'NUEVO' POLÍTICO

El hecho de que los cambios políticos deseados tengan lugar dentro del marco de la representación política plantea una duda mayúscula en los participantes. Al fin y al cabo, ellos han criticado de forma unánime la labor de los representantes políticos. ¿Cómo podría entonces un representante político liderar esa transformación? El dilema que afrontan es que esa figura imaginada tiene que estar a tanta distancia del experto como de los representantes que tanto critican, lo que no resulta fácil. Para concluir este trabajo, vamos a reflexionar en torno a la "nueva" figura del representante político que emana de los debates en los grupos de discusión. Como veremos, esta "nueva" figura nos va a permitir pensar mejor el recorrido que hemos ido viendo a lo largo de los diferentes capítulos.

La mayoría de los grupos coinciden en demandar la figura de un político más profesional. El político tiene que saber más. Esa es una de las razones principales por las que se ponía límites a la participación y por las que se cruzaba la cuestión de los expertos. Hay, en este sentido, un reconocimiento implícito, a excepción de los grupos más vulnerables, de que la política es

una tarea compleja, lo que requiere profesionales. Pero, por supuesto, esto es un caballo de Troya en las conversaciones entre los participantes en la mayoría de los grupos, porque cuanto más profesional sea el representante, en el fondo, menos político será.

A la hora de pensar la figura del político que tiene que venir a reformar el sistema, la ciudadanía tiene que establecer dos líneas claras de separación. Por un lado, frente a los expertos, que han dicho que no pueden gobernar aunque estén preparados y, por el otro lado, frente a la ciudadanía, que tampoco puede gobernar y además no está preparada. En este sentido, gobernar es algo distintivo que no tiene nada que ver con gestionar, que es lo que hacen los técnicos, ni tiene que ver con elegir o votar, que es lo que hace la ciudadanía. Los políticos gobiernan, pero ¿qué es lo que caracteriza a un buen gobernante?

Aquí podríamos dividir los grupos en dos grandes escenarios, una separación que hemos hecho ya emerger a lo largo del trabajo, por lo que podríamos sugerir al final que esta polarización adquiere fuerza a la hora de interpretar la posición de la ciudadanía frente a la política. Por un lado, estarían los grupos más conservadores [gp2; gp3; gsc1] y la mayoría de los grupos de la sociedad civil [gsc2; gsc3; gsc4; gsc6]. Por otro lado, estarían los grupos más progresistas [gp1; gp4 y gsc5]. Los primeros grupos tienden a caracterizar la nueva figura del político más en el campo de los expertos, mientras que los segundos se inclinan por dibujarla más en el campo de la ciudadanía, aunque, por supuesto, unos y otros no pretenden confundir ni expertos ni ciudadanía con políticos.

UN GOBIERNO CON TÉCNICOS

Para los primeros grupos, la cuestión de la profesionalidad es elemental. El “nuevo” político tendría que tener experiencia en el campo donde va a ejercer como político, dirán los trabajadores cualificados [gsc1]. El ideal

sería encontrar "una persona que quiera ser las dos cosas", técnico y político [gsc1], pero como eso es algo poco viable, algunos de estos grupos se entregan a la difícil tarea de especificar las características de ese nuevo político. El primer paso es distinguir lo que diferencia a un político y este rasgo será, para casi todos, la "vocación" [gp2; gp3; gsc2]. No obstante, la vocación es algo difuso y vago. Otra forma de verlo es como lo plantean en el grupo de Ciudadanos, un saber casi inmaterial: "Lo técnico se aprende; lo político se lleva" [gp3].

La "vocación" es demasiado general y la alternativa política se muestra demasiado vaga. Algunos grupos parecen ser conscientes de este problema y avanzan en sus argumentaciones. Para los simpatizantes de Ciudadanos "tú puedes ser muy buen médico… muy buen maestro, muy buen tal, y luego como político ser nefasto" [gp3]. Nos acercamos a la clave, al menos, al sentido que los grupos confieren a la "vocación". Los simpatizantes del Partido Popular piensan que el político "tiene que tener una mínima formación para saber hablar con otra persona" [gp2]. Gobernar es gestionar, pero no números como los técnicos, sino políticas, y eso requiere una formación básica para saber gestionar personas e información. Ahí lo importante es, entonces, saber rodearse de buenos técnicos. Desde ese punto de vista da igual que el nuevo político no sepa del campo político en el que ejerce, porque lo importante es lo otro: "Si sabes gestionar, sabes escuchar y tienes muy claro el camino que quieres seguir en tu política, me da igual que sea en Sanidad, en Cultura o en lo que sea; es prácticamente lo mismo" [gp3].

Todos estos grupos tienen una inclinación a visualizar las tareas de la política como si fueran la gestión de las soluciones técnicas. La metáfora que mejor retrata esta forma de gobernar la dan los simpatizantes de Ciudadanos. Para estos, el ejemplo de lo que significa gestionar personas e

información lo ofrece la empresa de moda Inditex. El que dirige la empresa, dice un participante, “no tiene ni idea de ropa”, pero es un gestor “como la copa de un pino” [gp3].

UN GOBIERNO CON VISIÓN ESTRATÉGICA

La visión que tienen los grupos más progresistas es que el experto no representa la sabiduría imparcial. La técnica está preñada de ideología y, por tanto, pensar en el “nuevo” político como un mero gestor de la información suministrada por los expertos alteraría su específico papel como gobernante. Para ellos, el “nuevo” político que tiene que venir no se distingue por su conocimiento, lo que importa es la visión estratégica del político. La política es, en definitiva, una visión general, el horizonte por el cual se apuesta, como recoge este relato de un participante en el grupo de los simpatizantes socialistas:

> Yo creo que hay que pedirle un plus y hay que pedirle un plus que es una visión de cómo quiere que sea su pueblo o su ciudad, es decir, hacia dónde quiere ir, y por eso es importante que haya opciones de derecha y opciones de izquierda, porque está claro que no es el mismo camino [gp1].

El grupo de las asociaciones altermundistas contrasta decisiones estratégicas y decisiones operativas [gsc5]. Las primeras las debe tomar siempre el político; las segundas, los técnicos. El enfoque de cómo debería ser la figura del nuevo político cambia radicalmente respecto a los primeros grupos que hemos visto. En el escenario imaginado, los técnicos pueden ser mediadores entre los políticos y la sociedad, pero lo que diferencia un escenario de otro es el problema que se trata de resolver. Para este grupo, los problemas tienen que venir de la población afectada y los políticos tendrían que tomar las decisiones estratégicas necesarias para intentar resolverlo, mediando entre una y otros las diferentes soluciones técnicas disponibles: “Entonces, yo creo que lo que tendría que haber es esos técnicos que sirvieran de enlace entre esos políticos y la población a la que

le afecta las cosas" [gsc5].

El grupo de Podemos e IU es quizá el que muestra una alternativa más diferente. Para este grupo, el saber experto es igualmente importante a la hora de valorar el "nuevo" político, pero este se tiene que destacar por su capacidad crítica: "Entonces, hace falta también que tenga una visión de conjunto y que cuando un tío se te ponga en la televisión con una pizarra a decirte que 5 más 5 son que te van a subir los impuestos, tú tengas la capacidad crítica de decir 'mira, pues a lo mejor no'" [gp4]. En el grupo de los altermundistas, por ejemplo, se mencionan las diferencias que dos economistas, "o sea, dos técnicos", como Varoufakis, el exministro griego, y Guindos, el ministro español por entonces, tenían frente al problema de la economía [gsc5]. Ambas son legítimas, pero entienden que a unos le parezca mejor una postura y a otros la otra. En el "máximo de utopía", para los simpatizantes de Podemos e IU, esto significaría no solo elegir a los representantes, sino "elegir al grupo de expertos" [gp4], sometiendo esas actuaciones técnicas a las decisiones democráticas [gp4]. En suma, en estos grupos la figura del "nuevo" político está muy conectada con un papel más protagonista de la ciudadanía. Si para los socialistas los técnicos parecían tener que estar a las órdenes de los políticos en una relación marcadamente jerárquica, para los otros dos grupos el "nuevo" político tendría que ser capaz de establecer un diálogo democrático con las soluciones dadas por los técnicos.

ALTERNATIVAS A LO VIEJO

Si podemos concluir con algo es que todos los grupos quieren cambiar lo que hay, nadie se quiere quedar donde está. Todos buscan alternativas a lo viejo. La configuración de lo nuevo es distinta, porque no todos perciben los orígenes de la problemática del mismo modo, a pesar de coincidir en muchas cuestiones (como las relaciones de lealtad que vertebran el sistema

político). El grupo de los más conservadores piensa que los políticos son más bien ineptos y no consideran a los expertos en sus actuaciones políticas. Todas sus alternativas van dirigidas a solucionar este problema, a extender la autoridad de los expertos en los gobiernos, al tiempo que se elimina el "amiguismo" en el sistema. En cambio, los grupos más progresistas piensan que las actuaciones políticas están muy mediadas por *lobbies* o grupos dominantes que imponen sus intereses. Sus soluciones van encaminadas a proteger entonces el espacio de los políticos y la ciudadanía en las actuaciones políticas.

Todos los grupos caen en contradicciones. Al inicio del capítulo ya decíamos que hablar de soluciones es mucho más difícil que hablar de los problemas. El dilema que enfrentan es difícil, porque sacar la política de un escenario de relaciones de lealtad a otro vertebrado por relaciones cívicas y públicas supone un extraordinario ejercicio de crítica. Con unas y otras alternativas, la ciudadanía intenta dar ese salto dentro del sistema representativo y abrir el sistema político para que funcione mejor. Los equilibrios y las posiciones entre los diferentes actores en juego (políticos, expertos y ciudadanía) seguirán siendo, de todas maneras, materia de debate para ese nuevo escenario político que se anhela.

CONCLUSIONES

Uno de los elementos más críticos de los últimos años ha sido el descontento político de la ciudadanía. El descontento no es negativo en una democracia, muestra la vivacidad de una sociedad civil capaz de expresar su desacuerdo ante unos representantes que se percibe que hacen mal su trabajo. Eso es parte del juego democrático. La singularidad de este descontento ha sido la capacidad que ha tenido para influir el habitual *modus operandi* del sistema político y la mejor muestra de eso sería el nuevo escenario político surgido, con dos nuevos partidos. A nadie se le escapa, como hemos visto a lo largo del libro, que Podemos y Ciudadanos forman parte de un proceso mediante el cual la ciudadanía se ha revuelto contra las formas tradicionales de hacer política.

No es extraño que muchos académicos se interroguen por los límites de este descontento y hasta qué punto desafía el orden establecido. Pero lejos de suponer una reacción iracunda, la mayoría de los participantes en los grupos de discusión identificaba ese descontento con una forma singular de funcionamiento del sistema político: las relaciones de lealtad dentro de los partidos políticos. La mayoría de los participantes identificaba el malestar ciudadano con un sistema político aislado, regido por normas privadas (relaciones de lealtad) antes que públicas. Ello contribuye a ir imaginando un modelo de referencia que, si bien es difuso, mira (con diferencias importantes entre los diferentes grupos) hacia una política más abierta, más transparente y más vinculada con la ciudadanía.

La encuesta de opinión pública realizada en la investigación nos dice que la ciudadanía quiere procesos políticos que hagan converger participación y representación. Los debates en el seno de los grupos de discusión se orientan entonces a pensar un sistema político fuera de sospecha. Pero aquí los elementos señalados por los diferentes grupos son muy diferentes. Comparten mucho diagnóstico, pero no la solución. La participación es básica en las referencias que la gente tiene sobre la democracia, pero nadie se imagina a sus vecinos participando en un gobierno. Los mismos males con los que se describía a los representantes (egoísmo, falta de preparación) afectarían, para la mayoría, a la población. Esto diluye cualquier proyecto participativo en el imaginario político de la gente. El modelo mixto ofrece, en cambio, una salida razonable para muchos, aunque adquiere formas muy distintas en boca de unos u otros participantes. En cualquier caso, suelen ser reformas siempre orientadas a democratizar el sistema, que se traduciría en un sistema de partidos más abierto, mejor relacionado con el afuera, o sea, la sociedad civil, que es la que sustenta para nuestros participantes la democracia. En definitiva, no podemos decir que la ciudadanía quiera ocupar el lugar de los políticos, sino que quiere a otro tipo de políticos dentro de un sistema político reformado.

La posibilidad de alcanzar un gobierno tecnocrático como alternativa al sistema político representativo tampoco encuentra apoyos suficientes. La encuesta nos mostró el gran atractivo que tiene la técnica como variable política. Aquellos que piensan que los expertos tienen muchas capacidades están más cerca de un gobierno liderado por técnicos, pero la mayoría de la población se opone. No obstante, para casi todo el mundo, el saber técnico es una herramienta esencial en un mundo complejo, que requiere conocimiento y capacidades para lidiar políticamente con él. El mérito es un elemento medular en las disquisiciones sobre el modo en que los

políticos tienen que gestionar lo público. Si la participación está muy vinculada en los debates en los grupos a la capacidad de substraer la política de sus relaciones de lealtad, el mérito se vincula mucho a la capacidad de gestión de los políticos. Seguramente ese sea uno de los límites políticos más serios para pensar los modelos políticos deseados por la ciudadanía, que en cualquier caso se opone a una tecnocracia. El dilema, como con la participación, será la convergencia entre la técnica y la política.

En los dilemas fuertes, como este, es muy habitual polarizar las alternativas. Esto favorece que simplifiquemos los procesos políticos, como si estos fueran un juego de suma cero. Oponemos representación y participación como si fueran dos modelos contrarios. Igual ocurre con la tecnocracia, que solemos oponer a la representación y la participación. Sin embargo, lo que podemos visualizar en este trabajo es que esas separaciones entre unos procesos políticos y otros plantean muchos problemas a la ciudadanía. Desde su punto de vista, antes que oponer participación y representación, deberíamos pensar en qué medida podemos expandir las prácticas representativas integrando la participación. Muchas de las ideas que los participantes en los grupos debatían implicaban abrir las relaciones de representación desde una práctica participativa, sin con ello suponer la superación de la lógica representativa. El caso de la tecnocracia dibuja un escenario similar. El problema no es la tecnocracia, a la cual se opondrían los ciudadanos, sino la articulación del saber de los expertos en una relación política representativa. Las articulaciones entre representación, participación y expertos abren un horizonte político distinto. No se trata de eliminar, ni rechazar. Lo que se plantea la ciudadanía es más sencillo y a la vez mucho más complejo: articular políticos, ciudadanos y expertos en un sistema representativo reformado.

APÉNDICE METODOLÓGICO

La investigación cualitativa consistió en diez grupos de discusión, que fueron realizados entre los meses de junio y noviembre del año 2015. Cada uno de los grupos estaba formado por entre seis y ocho personas con perfiles homogéneos orientados a facilitar el debate. El marco muestral se diseñó con base en criterios de variabilidad de las posiciones sociopolíticas, seleccionando un conjunto de posiciones relevantes desde un punto de vista teórico. Así, compusimos grupos altamente politizados y activos (de votantes y simpatizantes de partidos, miembros de asociaciones y movimientos sociales) y otros grupos no politizados (con personas que no se identifican claramente con partidos o entidades de carácter más político, pero con distintos perfiles de clase, edad y nivel educativo). Esta distinción entre grupos politizados y no politizados, además de las diferencias de estatus y estudios, se apoya en estudios previos que indican cómo la experiencia personal en relación con la política y los recursos a disposición del individuo son muy significativos a la hora de evaluar los procesos políticos (Montero *et al*., 2006). En el cuadro de abajo se recoge la distribución de los grupos y sus características sociodemográficas. La captación fue realizada a través de una empresa contratada para este fin y la moderación fue poco dirigida; se siguió un guion similar al que emplearon Hibbing y Theiss-Morse (2002) en su investigación en Estados Unidos. Los debates duraron un promedio de hora y media y se realizaron en ubicaciones cercanas a los participantes. A lo largo del texto identificaremos

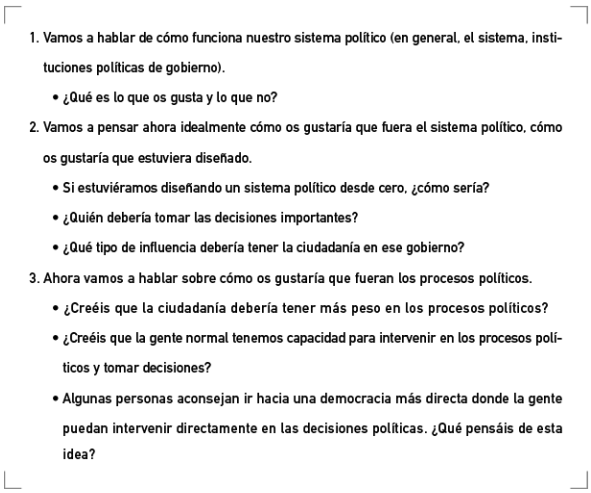
los distintos grupos siguiendo un sencillo código. “gp” se relaciona con uno de los cuatro grupos politizados, que siempre son activistas o militantes de un partido político: “gp1” del Partido Socialista; “gp2” del Partido Popular, “gp3” del partido Ciudadanos; y “gp4” del partido Podemos e Izquierda Unida. El resto de los grupos son identificados con el código “gsc” (sociedad civil): “gsc1” reúne a profesionales liberales o empresarios; “gsc2” son trabajadores precarios; “gsc3” son estudiantes universitarios; “gsc4”, jóvenes que ya no estudian, ni trabajan; “gsc5”, personas activistas en movimientos sociales altermundistas; y “gsc6”, jubilados. En la siguiente tabla se detalla la composición de cada uno de ellos y el guion básico de la moderación.

DISTRIBUCIÓN DE GRUPOS DE DISCUSIÓN

GP1 Jaén, 2015 Activistas. Adultos de partidos de izquierda. Militantes, simpatizantes o abiertamente votantes del PSOE Estudios secundarios y universitarios Trabajadores cualificados y profesiones liberales 9 miembros (4 mujeres y 5 hombres) 30-55 años	GP2 Sevilla, 2015 Activistas. Adultos. Militantes, simpatizantes o abiertamente votantes de partidos de derechas (Partido Popular) Estudios superiores Profesiones liberales (enfermería, abogacía, función pública) 6 miembros (3 hombres y 3 mujeres) 25-50 años
GP3 Granada, 2015 Activistas. Adultos de partidos de centro. Militantes, simpatizantes o abiertamente votantes de Ciudadanos Estudios secundarios y universitarios Trabajadores cualificados y profesiones liberales 7 miembros (4 mujeres y 3 hombres) 20-55 años	GP4 Sevilla, 2015 Activistas. Adultos de partidos de izquierda. Militantes, simpatizantes o abiertamente votantes de Podemos e IU Estudios secundarios y universitarios 7 miembros (4 mujeres y 3 hombres) 20-50 años
GSC1 Málaga, 2015 No afiliados. Adultos con empresas o profesionales liberales, clase media profesional Predominio de profesionales altamente remunerados y cualificados 8 miembros (4 mujeres y 4 hombres) 35-55 años	GSC2 Algeciras, 2015 Trabajadores precarios No activistas. Trabajadores precarios, sector secundario y servicios Trabajadores de hostelería, construcción y servicios Estudios bajos y medios 6 miembros (4 hombres y 2 mujeres) 30-40 años
GSC3 Granada, universidad, 2015 Estudiantes universitarios No activistas 6 miembros (3 mujeres y 3 hombres) 20-25 años	GSC4 Jerez de la Frontera, 2015 No activistas. Jóvenes sin estudios secundarios acabados En paro o buscando trabajo 6 miembros (4 hombres y 2 mujeres) 18-23 años
GSC5 Córdoba, 2015 Activistas sociales. Activistas de asociaciones altermundistas Profesionales y trabajadores en cooperativas, economía social Estudios medios y superiores 6 miembros (4 mujeres y 2 hombres) 30-40 años	GSC6 Barbate, Cádiz, 2015 Trabajadores jubilados No activistas Trabajadores de agricultura, pesca y amas de casa sin estudios universitarios 7 miembros (4 hombres y 3 mujeres) Mayores de 65 años

GUION BÁSICO DE MODERACIÓN DE LOS GRUPOS DE

DISCUSIÓN



1. Vamos a hablar de cómo funciona nuestro sistema político (en general, el sistema, instituciones políticas de gobierno).
   - ¿Qué es lo que os gusta y lo que no?
2. Vamos a pensar ahora idealmente cómo os gustaría que fuera el sistema político, cómo os gustaría que estuviera diseñado.
   - Si estuviéramos diseñando un sistema político desde cero, ¿cómo sería?
   - ¿Quién debería tomar las decisiones importantes?
   - ¿Qué tipo de influencia debería tener la ciudadanía en ese gobierno?
3. Ahora vamos a hablar sobre cómo os gustaría que fueran los procesos políticos.
   - ¿Creéis que la ciudadanía debería tener más peso en los procesos políticos?
   - ¿Creéis que la gente normal tenemos capacidad para intervenir en los procesos políticos y tomar decisiones?
   - Algunas personas aconsejan ir hacia una democracia más directa donde la gente puedan intervenir directamente en las decisiones políticas. ¿Qué pensáis de esta idea?

La investigación cuantitativa consistió en una encuesta realizada dentro de un panel con origen probabilístico que desarrolla el IESA (CSIC), que tuvo lugar a finales del año 2015. Se realizaron 1.081 entrevistas en Andalucía.

FICHA TÉCNICA

Universo: personas con 16 años o más residentes en Andalucía.

Marco: panel ciudadano PACIS.

Tamaño de la muestra teórica: 2.280 entrevistas.

Tamaño de la muestra real: 1.081 entrevistas.

Toma de datos: la muestra se ha contactado por correo electrónico, mediante SMS y por teléfono, y han cumplimentado el cuestionario por internet (en una página web) o mediante entrevista telefónica.

Tipo de muestreo: se ha seleccionado a los integrantes del panel PACIS de hogares que no hubiesen participado en la primera ola, más los individuos necesarios para completar muestras mínimas de cada perfil de sexo y edad.

Ponderación: dado que la muestra resultante no es proporcional a la población

andaluza, se ha usado una calibración por el método *ranking* con las variables de sexo y edad por un lado y nivel de estudios por otro, tomando como referencia los totales poblacionales andaluces.

Nivel de error: el nivel de error muestral absoluto máximo esperado de los resultados de la encuesta es de ± 3,1% para un nivel de confianza del 95% en cada zona.

Tiempo medio de la entrevista: 14 minutos en cuestionario online y 19 minutos en el cuestionario telefónico.

Fechas de realización del trabajo de campo: 30/11/2015 a 30/12/2015.

BIBLIOGRAFÍA

ARMINGEON, K. y GUTHMANN, K. (2014): "Democracy in crisis? The declining support for national democracy in European countries, 2007-2011", *European Journal of Political Research*, vol. 53 (3), pp. 423-442.

BAIOCCHI, G. y GANUZA, E. (2017): *Popular Democracy: the paradox of participation*, Stanford, Stanford University Press.

BOBBIO, N. (1985): "La crisis de la democracia y la lección de los clásicos", en N. Bobbio, G. Pontara y S. Veca, *La crisis de la democracia*, Barcelona, Ariel.

CORDERO, G. y SIMÓN, P. (2016): "Economic Crisis and Support for Democracy in Europe", *West European Politics*, 39, pp. 305-325.

FERNÁNDEZ-ALBERTOS, J. (2012): *La democracia intervenida*, Madrid, Los Libros de la Catarata.

FONT, J.; NAVARRO, C.; WOJCIESZAK, M. y ALARCÓN, P. (2012): *¿"Democracia sigilosa" en España?: preferencias de la ciudadanía española sobre las formas de decisión política y sus factores explicativos*, Madrid, CIS.

FONT, J.; DELLA PORTA, D. y SINTOMER, Y. (2014): *Participatory democracy in southern Europe*, Londres, Rowman & Littlefield International.

GANUZA, E.; GARCÍA-ESPÍN, P. y DE MARCO, S. (2017): "Do people want more participation? Tensions and conflicts in Governance in times of skepticism", *Revista Estudios Políticos*, nº 176, pp. 253-279.

HAY, C. (2007): *Why We Hate Politics*, Cambridge, Polity Press.

HIBBING, J. R. y THEISS-MORSE, E. (2002): *Stealth Democracy: Americans' Beliefs About How Government Should Work*, Cambridge, CUP.

INNERARITY, D. (2015): *Política en tiempos de indignación*, Barcelona, Galaxia Gutemberg.

JURADO, F. (2015): *Nueva Gramática Política: de la revolución en las comunicaciones al cambio de paradigma*, Barcelona, Icaria.

LAVEZZOLO, S. y RAMIRO, L. (2017): "Stealth democracy and the support for new and challenger parties", *European Political Science Review*, doi: 10.1017/S1755773 917000108.

MAGALHÃES, P. (2005): "Disaffected democrats: Political attitudes and political action in Portugal", *West European Politics*, 28 (5), pp. 973-991.

— (2014): "Government Effectiveness and Support for Democracy", *European Journal of Political Research*, 53 (1), pp. 77-97.

MANIN, B. (1998): *Los principios del gobierno representativo*, Madrid, Alianza Editorial.

MARTÍN CRIADO, E. (1997): "El grupo de discusión como situación social", *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, 79, pp. 81-112.

MONTERO, J. R.; FONT, J. y TORCAL, M. (eds.) (2006): *Ciudadanos, asociaciones y participación política en España*, Madrid, CIS.

RÍO, A. DEL; NAVARRO, C. y FONT, J. (2016): "Ciudadanía, políticos y expertos en la toma de decisiones políticas: la percepción de las cualidades de los actores políticos importan", *REIS*, nº 154, pp. 83-102.

SÁNCHEZ-CUENCA, I. (2014): *La impotencia democrática*, Madrid, Los Libros de la Catarata.

TORCAL, M. y MONTERO, J. R. (eds.) (2006): *Political Disaffection In Contemporary Democracies:*

Social Capital, Institutions, and Politics, Londres, Routledge.
URQUIZU, I. (2016): *La crisis de representación en España*, Madrid, Los Libros de la Catarata.

NOTAS

1. Se trata de la encuesta del CIS 2860 del año 2011, que es analizada en Font *et al.* (2012), y de los grupos de discusión desarrollados en los años 2011 y 2013, que aparecen descritos en Ganuza *et al.* (2017).
2. Los datos que se exponen en este apartado representan porcentajes acumulados de casos en los que los encuestados mencionan "la política" o "la corrupción" como uno de los tres principales problemas del país o de la comunidad autónoma, según el ámbito por el que se les pregunta.
3. En lo que resta del libro vamos a hacer referencias a los grupos de discusión siguiendo un sencillo código. Cuando aparezca "gp" al lado de un comentario entrecomillado significa que es parte de la conversación de un grupo de discusión cuyos miembros tenían un perfil muy politizado, siendo activistas o militantes de uno de los cuatro partidos políticos analizados ("gp1", el PSOE; "gp2", el PP; "gp3", Ciudadanos; y "gp4", Podemos e Izquierda Unida). Si por el contrario aparece "gsc" es que los miembros del grupo de discusión no tenían un perfil activista en un partido político: "gsc1" eran profesionales liberales y empresarios; "gsc2", trabajadores precarios; "gsc3", estudiantes universitarios; "gsc4", jóvenes sin estudios, ni trabajo; "gsc5", miembros de alguna asociación altermundista; y "gsc6", jubilados. Véase el apéndice metodológico para más información.
4. Para los jóvenes sin estudios, los ciudadanos estarían igualmente "mal educados" o "no estamos formados desde la base" [gsc4].
5. El primer paso ha sido homogeneizar las cuatro preguntas que miden inequívocamente esa idea convirtiéndolas todas en escalas 0-10 y, el segundo, construir un único indicador como suma de las cuatro transformándolo a una escala 0-10 para facilitar su interpretación.

Document Outline

- Autores
- ¿Por qué la gente odia la política?
  - Créditos
  - Introducción
    - La investigación
    - El libro
  - Capítulo 1. La política como problema
    - El impacto del descontento. ¿Crisis o más democracia?
    - ¿El regreso de la política?
  - Capítulo 2. ¿Por qué odiamos la política?
    - Un sistema fallido
    - Época de cambios. De la crisis del sistema a la reforma
    - ¿Qué se quiere cambiar en la política?
    - Participación frente a representación
    - La demanda de un sistema más participativo que el actual
  - Capítulo 3. Los dilemas de la participación como alternativa: ¿escuchar, opinar o decidir?
    - Los límites de la participación
    - ‘Sería peor’
  - Capítulo 4. Los desafíos del cambio político: el mérito y los expertos
    - El (aparente) irresistible encanto de los expertos
    - Expertos, elecciones y mecanismos participativos
  - Capítulo 5. ¿Y entonces, qué? Las reformas políticas imaginadas
    - El contexto: ¿por qué se habla más de política?
    - Reformas en el sistema representativo
    - La simplificación de la política
    - La figura del ‘nuevo’ político
  - Conclusiones
  - Apéndice metodológico
    - Distribución de grupos de discusión
    - Guion básico de moderación de los grupos de discusión
    - Ficha técnica

- Bibliografía
- Notas